



Confederación Sindical Internacional

4º CONGRESO MUNDIAL

Copenhague, 2 - 7 de diciembre de 2018

Reforzar el poder de los trabajadores y las trabajadoras: Cambiar las reglas

1. La paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social (*principio fundador de la Constitución de la OIT*).
2. Desde la posguerra, la justicia social nunca había estado tan amenazada como lo está hoy en día. La inestabilidad económica, social y política pone en peligro los derechos humanos y sindicales, fundamento esencial para llevar a cabo actividades sindicales libres y democráticas.
3. La CSI reclama una visión alternativa para la gobernanza de la economía mundial. Un modelo de desarrollo basado en los derechos, el trabajo decente, la redistribución de la riqueza, democracia participativa, igualdad de género y la protección e inclusión social de todas las personas. Una visión que incorpore las dimensiones social, medioambiental y política y que trascienda el crecimiento puramente económico. Se requiere un nuevo contrato social para el Siglo XXI.
4. El año 2018 marca el 150º aniversario de la creación de la primera central sindical nacional, en el Reino Unido. También se cumplirá el 70º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El legado de esos logros está ahora en nuestras manos.

Nuestro objetivo de organización

5. Organizar para reforzar el poder de los trabajadores y trabajadoras constituye el mandato central del movimiento sindical internacional. Para conseguirlo, debemos crecer. El Congreso establece como objetivo incrementar la membresía total de la CSI en un 10 por ciento con vistas al próximo Congreso. Esto requiere adoptar tanto métodos tradicionales de organización respecto a la mano de obra relativamente estable como innovaciones para abordar los entornos cambiantes a los que nos enfrentamos muchos de nosotros – especialmente los jóvenes– en que las relaciones de empleo e incluso la producción están integradas en redes y son más móviles, pero que pueden y deben organizarse. La CSI promoverá la justicia social, involucrando a todo tipo de trabajadores/as, en el centro de un frente global antifascista.

Un sistema fallido

6. El sistema económico y el actual modelo de globalización benefician de manera desproporcionada a quienes poseen el capital. La crisis financiera expuso las deficiencias del mercado inherentes a este sistema, que

persistieron a lo largo de la recuperación. Las grandes firmas que ocasionaron el colapso del sistema financiero vuelven a asumir el mando. La economía real sigue atrapada por unos mercados financieros insuficientemente regulados, y fusiones y adquisiciones han creado monopolios en algunos sectores. La inversión ha resultado insuficiente para derivar en una recuperación que beneficie a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, mientras que la desigualdad se ha intensificado y el 1 por ciento más rico de la población controla actualmente más de la mitad de la riqueza mundial.

7. La importancia y papel de los Estados han venido siendo atacados desde los años 1980. Los sistemas impositivos se han vuelto menos progresivos y el poder redistributivo de los Gobiernos se ha visto reducido. Políticas fiscales nacionales que erosionan la progresividad impositiva, sumadas al fracaso de Gobiernos e instituciones internacionales a la hora de combatir el dumping fiscal internacional, la evasión de impuestos y el fraude fiscal, han socavado aún más las políticas redistributivas.
8. Paradójicamente, después de que el sector público salvase al sector financiero con paquetes de rescate, los grandes bancos y grupos de reflexión conservadores buscan debilitar los sectores públicos en todo el mundo. Han venido impulsando la austeridad fiscal y recortes a la seguridad social que reducirían los ingresos y la seguridad económica de las familias trabajadoras. En nombre de la reforma, los Gobiernos han introducido cambios neoliberales en las regulaciones del mercado de trabajo, que atacan y debilitan la libertad sindical y la negociación colectiva, la protección del empleo y otros derechos humanos y sindicales fundamentales.
9. Gobiernos y empresas continúan socavando los servicios públicos de calidad aunque esté perfectamente demostrado que la prestación universal de servicios públicos, junto con apoyo a los ingresos de desempleo y jubilación, es una de las maneras más efectivas de redistribuir la riqueza y luchar con la desigualdad, además de apoyar y fomentar la innovación. Unos servicios públicos independientes y de calidad, junto con la protección social universal, resultan esenciales para la democracia, y su erosión está alimentando el populismo y el extremismo.
10. Las multinacionales se han aprovechado del debilitamiento del poder de los Gobiernos, abusando de los acuerdos comerciales para frenar la regulación y promover la privatización de los servicios públicos. Aquellos países con un alto nivel inversión extranjera no han registrado mejoras en las condiciones de trabajo, los salarios o la seguridad social, ni una reducción de la informalidad.
11. Centrándose en las empresas y dejando de lado a los sindicatos y grupos democráticos de la sociedad civil, la cooperación al desarrollo esencialmente no ha conseguido garantizar que el crecimiento beneficie a las familias trabajadoras y mejore las condiciones de vida de manera sostenible.

12. Unas pocas corporaciones poseen un poder ilimitado, teniendo en cuenta que el 80 por ciento de los beneficios son acaparados por apenas 10 por ciento de las empresas que cotizan en bolsa. Sin embargo, dependen de una mano de obra global donde menos del 60 por ciento de los trabajadores/as cuenta con un contrato formal. La mayoría debe hacer frente a un trabajo precario, inseguro y muchas veces en condiciones peligrosas, generalmente sin protección social. El 40 por ciento de nuestros compañeros y compañeras lucha por sobrevivir en la economía informal sin derechos, sin un salario mínimo ni protección social. El hecho de que hasta 45 millones de personas se encuentren sometidas a condiciones de esclavitud moderna, pone aún más de manifiesto el escándalo de la explotación de la fuerza laboral mundial presa de la codicia corporativa. Al mismo tiempo, las cadenas mundiales de suministro canalizan la riqueza a un puñado de corporaciones mundiales a expensas de los trabajadores y trabajadoras de esas cadenas de suministro.
13. Los niveles históricos de desigualdad y desempleo masivo son el resultado de políticas de “goteo” y, más recientemente, de las medidas de austeridad. Estas prescripciones fallidas tienen profundas consecuencias negativas sobre los trabajadores/as, siendo las mujeres quienes asumen la mayor carga.
14. La democracia se convierte en un daño colateral, viéndose corrompida en un gran número de países por la concentración de la riqueza. Los papeles de Panamá, las filtraciones de Bahamas o los papeles del Paraíso han revelado la amplitud del problema. Los trabajadores/as, gracias a su posición dentro de las instituciones, están bien situados para desvelar y exponer la corrupción, el fraude y la explotación fiscal. Es necesario proteger debidamente a aquellos que llaman la atención sobre las trampas fiscales de las empresas o respecto a otras cuestiones de importancia crítica en el entorno laboral.
15. Resulta trágico constatar que este modelo económico en el que predomina la explotación cuenta con el apoyo de la mayoría de los Gobiernos que promueven activamente, o permiten de forma pasiva, el ataque a los derechos humanos y sindicales y la supresión de salarios y protección social. Las reglas de la economía mundial benefician a unos pocos, incrementan las desigualdades, excluyen a un número cada vez mayor de personas de la posibilidad de una vida decente, promueven la privatización, asignan una financiación insuficiente servicios públicos y crean un descontento masivo. Las reglas deben cambiar.
16. El multilateralismo no ha conseguido repeler las tendencias nacionalistas represivas en todo el mundo. Naciones Unidas y agencias multilaterales – incluyendo las Instituciones Financieras Internacionales–, con mandatos que abarcan desde la seguridad hasta el desarrollo, el medio ambiente, los derechos humanos, las mujeres, los refugiados, la gobernanza financiera, el comercio, hasta mejorar la vida de niños y niñas, se han mostrado ineficaces y deben reformarse.

17. Allí donde los trabajadores y trabajadoras no ven los resultados prometidos por los responsables políticos, se observa el surgimiento de partidos populistas de extrema derecha.
18. Se han registrado ahora cambios tectónicos a nivel político. Los partidos extremistas han ganado poder en muchos países, fomentando la xenofobia, el nacionalismo, el proteccionismo y dando pie a fricciones diplomáticas.
19. Esto conlleva otros desafíos tremendos: la falta de trabajo, el envejecimiento de muchas sociedades, el cambio climático, una nueva ola de innovaciones tecnológicas y el surgimiento de nuevos modelos empresariales como las plataformas digitales y nuevas formas atípicas de empleo.
20. El respeto de las normas fundamentales del trabajo, en particular los Convenios 87 y 98 de la OIT, debe ser un elemento central de las reformas necesarias. Estas normas representan derechos humanos universalmente aplicables. Nuestra alternativa es un modelo de globalización anclado en la sostenibilidad y la preservación ambiental, así como en la integración regional y la complementariedad productiva, donde los acuerdos comerciales incorporen cláusulas vinculantes sobre desarrollo sostenible, protecciones a los trabajadores/as, derechos humanos y el medio ambiente, la posibilidad de reclamar dichos derechos, y el reconocimiento del poder regulatorio de los Gobiernos y su obligación de proveer servicios públicos. La CSI exhorta a la más amplia implementación posible de esas protecciones, incluso en las zonas francas industriales, y la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento. Rechazamos los arreglos privados de arbitraje en los acuerdos comerciales.
21. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Acuerdo de París sobre el Clima y la negociación de un tratado vinculante de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos dan pie a cierto optimismo. Sin embargo, el fracaso para asegurar la paz, lograr el desarrollo sostenible, financiar servicios públicos universales de calidad, asegurar la gestión global de la migración o reasentar a los refugiados, ya ni digamos para frenar la ventaja comercial injusta de las naciones más ricas y reducir la desigualdad, crea un círculo vicioso de desconfianza y desmovilización.
22. Eliminar la pobreza y lograr igualdad y autonomía para la mujer, trabajo decente, desarrollo y sostenibilidad, así como una mayor justicia social y económica que auguran los ODS, no podrán hacerse realidad a menos que se ponga fin a la carrera en busca de beneficios, ganemos la lucha a favor de las libertades y los derechos democráticos y se garantice la financiación de servicios públicos de calidad.
23. En un mundo con recursos limitados y una gran parte de la población viviendo aún bajo el umbral de la pobreza o en situaciones de marginación, el actual modelo de crecimiento resulta insostenible para las generaciones futuras. La CSI trabajará junto con sus afiliadas en el desarrollo de un modelo de desarrollo sostenible dentro del marco de los ODS y la Agenda 2030 de la ONU. El

Congreso recuerda la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre la financiación al desarrollo, que establece el marco global para financiar el desarrollo sostenible.

Nuestra solución

24. El Congreso compromete a la CSI a esforzarse por la realización de nuestra visión alternativa, con un nuevo contrato social de control público y democrático que dé prioridad a las personas y que garantice transiciones justas, el respeto de los derechos humanos y sindicales y la justicia social.
25. El nuevo contrato social debe apoyarse en sólidas bases éticas, lo que requiere la reforma de las instituciones multilaterales y de la gobernanza mundial para que aporten paz y justicia social. No puede haber compromiso alguno respecto a políticas macroeconómicas si no son capaces de asegurar el crecimiento inclusivo, el pleno empleo y el trabajo decente. El nuevo contrato social ha de garantizar que tanto Gobiernos como empresas asuman sus responsabilidades.
26. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ofrecen una oportunidad para promover objetivos que resultan críticos para el movimiento sindical. El Objetivo 5 (igualdad de género), el Objetivo 8 (trabajo decente y crecimiento económico) y el Objetivo 10 (reducir la desigualdad) revisten particular interés. El Congreso compromete a la CSI a presionar para que la OIT asuma un papel protagonista en estas áreas y por su parte apoyar a las afiliadas en la utilización de los ODS como herramienta de presión respecto a sus Gobiernos, proporcionando la información necesaria y fomentando discusiones. Esos objetivos deberían también orientar a organizaciones internacionales y la cooperación al desarrollo, particularmente instituciones financieras como el FMI, el Banco Mundial y otros bancos multilaterales de desarrollo. El respeto de los derechos sindicales y de los trabajadores representa un elemento importante para la reducción de la pobreza, el crecimiento inclusivo y economías resilientes.

Lo que haremos

27. El Congreso suscribe cuatro pilares de acción:
 - Paz, democracia y derechos
 - Regulación del poder económico
 - Transformaciones mundiales - Transiciones justas
 - Igualdad
28. Cada uno de estos cuatro pilares sienta sus bases en demandas de políticas económicas y sociales progresistas, igualdad e inversión en empleos, y en los derechos humanos y sindicales fundamentales para modelar el futuro del trabajo. Estas ambiciones solo podrán realizarse si se fundamentan en nuestro propio compromiso a organizarnos para lograr el crecimiento de los sindicatos, y el activismo a fin de reforzar el poder de los trabajadores y trabajadoras. Las promesas de los ODS y el Acuerdo de París sobre el Clima únicamente podrán cumplirse en un futuro de trabajo decente con pleno empleo, cohesión social y transiciones justas.

29. Estos pilares son los medios a través de los cuales podremos construir y concretizar el nuevo contrato social, piedra angular para el logro de los ODS.
30. La CSI es el paladín de los sindicatos a nivel internacional, responsable de integrar al movimiento sindical en su conjunto. A tal efecto, el Congreso compromete la CSI a llevar a cabo sus actividades globales de manera orgánica con las Organizaciones y Estructuras regionales, sus asociados en la Agrupación Global Unions y las afiliadas en todos los campos de acción. La CSI ha de ayudar a crear un entorno donde las confederaciones sindicales nacionales puedan organizar y movilizarse libremente sin amenazas de Gobiernos o empleadores, reconociendo las diferencias entre los sindicatos en función de su contexto cultural, estructura y mandato.
31. La CSI promueve reformas institucionales, donde la unidad de acción y la coordinación son cruciales para lograr una movilización política masiva. Para ello, la CSI fomentará la unidad a escala nacional, prestando la debida consideración a la diversidad de las afiliadas y el respeto del pluralismo.
32. El Congreso insta a la CSI a elaborar, en estrecha colaboración con las organizaciones regionales de la CSI, las Federaciones Sindicales Internacionales y las centrales nacionales, estrategias exhaustivas sobre campañas, comunicación y educación, teniendo en cuenta las distintas realidades en todo el mundo y centrándose en una clara división de tareas entre los distintos actores. Estas áreas representan temas extremadamente importantes para cada actor, pero la tarea no es la misma para todos ellos.
33. El Congreso reafirma que la densidad y la unidad sindical constituyen una base esencial para el movimiento de la CSI y se compromete a desplegar un esfuerzo exhaustivo para apoyarlas. El Congreso concede el debido reconocimiento al papel de las organizaciones y estructuras regionales en sus luchas, acciones y logros encabezando las acciones de CSI. El Congreso se compromete a asignar más recursos a las regiones.
34. El Congreso se compromete a aplicar una política de colaboración constructiva con organizaciones no afiliadas a la CSI, en consonancia con nuestros valores y principios, para reforzar la presencia de la CSI a nivel mundial.
35. El Congreso confirma que la tarea de promover y defender los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras tiene máxima prioridad para la CSI. A tal efecto, la CSI adoptará un enfoque coherente, inclusivo y coordinado, desarrollando herramientas de campaña nuevas y más efectivas y mejorando la capacidad para establecimiento de redes, en estrecha cooperación con sus afiliadas.

1. Paz, democracia y derechos

36. Conflictos armados, la creciente variedad de conflictos híbridos, la militarización de sociedades y el debilitamiento de la democracia, socavan la libertad sindical, ponen en peligro la integridad física de organizadores y líderes

sindicales y, en última instancia, afectan el poder y la fuerza del movimiento sindical. Cuando son menos de 12 los países que no están involucrados en conflictos, ya sea directamente, por alianzas, a través del comercio de armas, o en operaciones militares o de mantenimiento de la paz, queda claramente de manifiesto que la mayoría de los líderes de los países se inclinan hacia el conflicto y la exclusión.

37. Reafirmamos la Declaración de Principios adoptada por el Congreso Fundador de la CSI: *La Confederación se compromete a promover y actuar para la protección de la democracia en todo el mundo, de manera que se den las condiciones para que el pleno ejercicio de todos los derechos humanos, universales, indivisibles e inalienables, sea accesible a todas las personas. Defenderá en cualquier lugar del mundo los derechos colectivos y las libertades individuales, incluyendo la libertad de pensamiento, expresión y reunión. Defiende fervientemente el mantenimiento y reforzamiento de la paz y reivindica un mundo libre de armas de destrucción masiva y el desarme general.*
38. Trabajar por la paz, la democracia y los derechos implica garantizar un nivel de vida decente para todos y todas. Implica justicia social, igualdad y equidad. Implica acceso gratuito y universal a servicios públicos de calidad en educación, sanidad, cuidados y vivienda. Incluye además libertad de expresión, y particularmente libertad de prensa, para garantizar una ciudadanía informada, activa y comprometida. Implica solidaridad entre generaciones, y la plena inclusión de las esperanzas y aspiraciones de la gente joven.
39. La CSI está firmemente comprometida a defender los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Carta de la ONU y la Declaración Universal de Derechos Humanos.
40. El Congreso afirma que la prioridad central de la CSI es la defensa de los derechos sindicales y de los trabajadores/as. La CSI hará campaña por un sindicalismo libre, independiente, democrático y representativo en todo el mundo. Se fomentará la importancia del Comité de Derechos Humanos y Sindicales, así como de la publicación anual del Índice Global de los Derechos.

DEFENDER LA DEMOCRACIA

41. El Índice Global de los Derechos de la CSI, publicado anualmente, demostró que el espacio democrático ha sido limitado por los Gobiernos en más de 54 países en el último año, y que el número de países que registraron casos de violencia física y amenazas contra los trabajadores y trabajadoras se incrementó hasta 65 países en ese mismo período. En 59 países se ha detenido o encarcelado a sindicalistas. El desplazamiento de personas es el más importante de la historia, la amenaza de un conflicto nuclear es muy real, al igual que la creciente amenaza de ofensivas híbridas, y las democracias se muestran cada vez más impotentes frente al auge del autoritarismo y la dictadura. El compromiso inquebrantable del movimiento sindical internacional con la paz y las libertades y los derechos democráticos implica que los

trabajadores y trabajadoras están en primera línea de frente en las luchas contra Gobiernos cada vez más autocráticos y el militarismo que conllevan.

42. La educación pública de calidad para todos es un pre-requisito indispensable en la democracia. La formación y adquisición de un pensamiento crítico es esencial para el desarrollo y la salvaguardia de la democracia.
43. En un número cada vez mayor de países, los defensores de los derechos humanos y sindicales, así como activistas por la paz y el medio ambiente, llevan a cabo acciones corriendo el riesgo de encarcelamiento, desaparición o incluso asesinato. Los sindicatos deben solidarizarse con la paz y los derechos y libertades democráticos, y los Gobiernos han de seguir nuestro ejemplo.
44. El Congreso subraya la necesidad de cooperación y alianzas con organizaciones de la sociedad civil en base a los valores compartidos y respetando plenamente las competencias y la diferente naturaleza de cada parte. Esta cooperación brinda la oportunidad de reunir mayores apoyos respecto a las posiciones sindicales, al tiempo que las preocupaciones de estas organizaciones puedan ser incorporadas en el diálogo social.
45. El reforzamiento de dictaduras y de líderes autoritarios –incluso en países democráticos–, que promueven la xenofobia y el racismo, legitiman la discriminación, el acoso sexual y otras formas de violencia de género fomentando la misoginia, o atentan contra las libertades y los derechos democráticos, incita al miedo, la división y la exclusión; lo que a su vez ha fomentado el terrorismo y el conflicto.
46. El Congreso expresa asimismo su preocupación por las implicaciones para la democracia del surgimiento de poderosas compañías de tecnología de la información, que han sido capaces de utilizar datos para influir en las elecciones o configurar la opinión pública. El surgimiento de estas corporaciones supone una enorme amenaza, y podría resultar adverso para las reformas progresistas que buscan los sindicatos para la democracia, la paz y la justicia social.

PONER FIN A LOS CONFLICTOS

47. El Congreso reafirma su condena del terrorismo en todas sus formas y bajo cualquier pretexto, así como las políticas que violan los derechos humanos individuales y colectivos bajo la excusa de la lucha contra el terrorismo. Los esfuerzos para vencer al terrorismo tienen que abordar los problemas que los originan, especialmente la pobreza, la injusticia, la discriminación étnica y religiosa, y el desempleo. La cooperación internacional debe además romper las conexiones entre el terrorismo y el crimen organizado.
48. Existen muchos países donde aumentan los conflictos en las fronteras o sobre territorios en disputa, lo que da pie a tensiones étnicas y, en muchos casos, al surgimiento de grupos terroristas. El Congreso afirma que la CSI seguirá alzando su voz en solidaridad por la paz, el desarme, la democracia y los

derechos en el mundo entero. Los sindicatos pueden desempeñar un papel esencial tras los conflictos, así como después de los desastres naturales. El Congreso insta a los Gobiernos a apoyar y cumplir la nueva Recomendación 205 de la OIT sobre Empleo y trabajo decente para la paz y la resiliencia. Este instrumento aporta una orientación esencial para prevenir conflictos y en la reconstrucción después de un conflicto.

49. La CSI está comprometida con un mundo libre de armas de destrucción masiva, empezando por la plena implementación del Tratado de No Proliferación Nuclear y la Convención sobre las Armas Químicas. También nos comprometemos a reducir la proliferación de armas pequeñas y a reclamar una reducción del gasto militar y la reconversión de las industrias militares en industrias civiles y sostenibles. Ese dinero debería destinarse a servicios públicos vitales, inversión pública, empleos dignos, y a conseguir que se destine el 0,7 por ciento del PIB a la ayuda oficial al desarrollo. La CSI manifiesta su firme apoyo al Tratado de la ONU sobre la Prohibición de las Armas Nucleares y trabajará para acelerar su ratificación.
50. Rechazamos la instrumentalización y el reclutamiento forzoso de mujeres y jóvenes en conflictos armados en el mundo entero. Y condenamos toda forma de violencia contra las mujeres y niños/as, las personas LGBTQI y los grupos étnicos, indígenas o raciales, ejercida en el contexto de los conflictos armados.
51. El Congreso reconoce que el derecho de las mujeres a la autonomía física, la capacidad de generar ingresos y recursos propios, y la posibilidad de participar plenamente en las decisiones que afectan sus vidas y sus comunidades, resultan fundamentales para lograr la igualdad de género, la justicia social, una paz duradera y la democracia.
52. La solidaridad global es inherente a nuestra identidad, y seguiremos mostrándonos solidarios con los sindicatos y la población en aquellos países inmersos en conflictos, ocupaciones o dictaduras donde no exista un Estado de derecho ni la garantía de libertades democráticas.

SOLIDARIDAD GLOBAL

53. Palestina ha soportado 50 años de ocupación. Hemos apoyado reiteradamente los términos de una paz justa y sostenible, en particular de conformidad con las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de la ONU. Reafirmamos nuestra posición¹.
54. La continua ocupación de Cisjordania por parte de Israel, la existencia de asentamientos israelíes ilegales en la zona y su impacto sobre las vidas de los palestinos, imponen graves limitaciones al potencial de desarrollo económico y social de Palestina. En las condiciones actuales, cientos de miles de trabajadores palestinos no consiguen encontrar empleo, provocando desesperación y desilusión generalizadas. Muchos trabajadores palestinos,

¹ https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2CO_09-Democracia_paz_seguridad_y_NU-final.pdf

que dependen de trabajo precario en Israel y los asentamientos, terminan trabajando en condiciones de explotación. Resulta urgente tomar medidas para aportarles oportunidades de trabajo decente. Debe disuadirse a Estados y empresas de permitir o beneficiarse directa o indirectamente de cualquier actividad relacionada con los asentamientos ilegales.

55. La ocupación debe terminar, con la supresión de los asentamientos ilegales y la retirada de Israel de todos los territorios palestinos, así como con el desmantelamiento del muro de separación. En línea con nuestro compromiso hacia una solución de dos Estados con fronteras seguras para ambas naciones, pedimos a todos los países que reconozcan, sin demora, a Palestina como Estado soberano, con Jerusalén Oriental como su capital. Este reconocimiento contribuirá a confirmar el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación en una Palestina libre e independiente.
56. Reconocemos y alentamos la continuación de la cooperación entre Histadrut y la PGFTU, particularmente en relación con el acuerdo para transferir las cotizaciones sindicales de los trabajadores palestinos.
57. Reafirmando la decisión de su 3^{er} Congreso Mundial, la CSI denuncia el tremendo sufrimiento del pueblo saharauí, que ha persistido durante medio siglo, e insta a todas las partes involucradas en el conflicto del Sahara Occidental a buscar una solución justa duradera, aceptable y negociada bajo los auspicios de Naciones Unidas y basada en los principios de libertad y democracia.
58. Apoyamos asimismo las demandas de paz y seguridad en otros países devastados por conflictos, como Afganistán, Burundi, la República Centroafricana, Iraq, Líbano, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen. El mundo no puede cerrar los ojos ante la muerte y destrucción infligidas a civiles inocentes y la devastación de infraestructuras vitales.
59. El pueblo rohingya ha sufrido en Myanmar una de las peores atrocidades de los últimos dos años con un incremento del poder militar y la violencia que nuevamente vive dicho país. Las promesas de liberación y democracia para ese país se ven empañadas por el trato infame acordado a un pueblo que busca vivir en paz. Debe condenarse el silencio relativo de los países vecinos y las potencias mundiales, a pesar de las resoluciones del Consejo de Seguridad. El movimiento sindical ha defendido los derechos de toda la población de Myanmar a la paz, la democracia y los derechos fundamentales durante más de 25 años y seguiremos haciéndolo.
60. Deberá supervisarse la iniciativa del Cinturón y Ruta en China, por sus posibles repercusiones sobre los derechos humanos y laborales, civiles y políticos, derechos de la tierra y la soberanía de otros países.
61. Los derechos de los trabajadores y trabajadoras están siendo sistemáticamente denegados en países clasificados en la categoría 5 en el Índice Global de los Derechos de la CSI. En dichos países los derechos son

muy limitados y en muchos de ellos se están deteriorando, incluyendo Belarús, Grecia, Kazajstán, Turquía y Ucrania en Europa; Benín, Nigeria y Swazilandia en África; Bangladesh, Camboya, China, Corea, Fiji, Filipinas, Hong Kong, India, Indonesia, Irán, Laos, Myanmar y Pakistán en Asia y el Pacífico; Arabia Saudita, Bahrein, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos en Oriente Medio; y Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras y México en las Américas.

62. Hay una total ruptura del Estado de derecho en los países clasificados en la categoría 5+ del Índice Global de los Derechos, incluidos Burundi, la República Centroafricana, Eritrea, Libia, Palestina, Siria, Somalia, Sudán del Sur, Sudán y Yemen. La CSI acoge con beneplácito el acuerdo de paz entre Eritrea y Etiopía, confiando en que aporte un desarrollo democrático constructivo para ambos países y para todo el Cuerno de África.
63. El Congreso compromete a la CSI a acordar absoluta prioridad a sus acciones de solidaridad en los países incluidos en estas dos categorías del Índice.
64. El Congreso observa que, incluso en los países que cuentan con una legislación general sobre derechos sindicales, a menudo se priva a los trabajadores y trabajadoras del sector público de derechos legales básicos, como el derecho de sindicación y negociación colectiva. Desde los bomberos en Japón al personal sanitario que lucha contra el ébola en África, los trabajadores del sector público se ven privados sistemáticamente de sus derechos humanos mientras arriesgan su vida en el trabajo por el público. La defensa de estos derechos, así como la ratificación y la aplicación universales del Convenio 151 de la OIT, son una parte importante del programa de la CSI a favor de los derechos de los trabajadores.
65. La CSI se movilizará contra amenazas a la democracia como las que hemos visto con el robo de las elecciones en Honduras en 2017 y la violenta represión de las protestas, los golpes de Estado parlamentarios en Paraguay, Honduras y Brasil, y la supresión del voto en Estados Unidos.
66. Brasil registra un historial de corrupción corporativa y política que comienza con un golpe político orquestado contra la presidenta Dilma por una clase política donde más de 200 de sus representantes están acusados de corrupción, pero gozan de inmunidad debido a su cargo. El Gobierno ilegítimo de Temer ha atacado los derechos del trabajo, los salarios mínimos y la protección social ocasionando un desempleo generalizado. Y con la cruzada del juez Moro, respaldado por el imperio mediático Globo, se han propuesto ver a Lula encarcelado para que no pueda presentarse a la presidencia y poner fin a su poder. A pesar de que no contar con pruebas en su contra, Lula ha sido condenado a 12 años de cárcel por corrupción. La CSI respalda a Lula y hace un llamamiento a los pueblos para que se sumen a la campaña que lo apoya. El Congreso se solidariza con nuestras afiliadas y con el pueblo de Brasil para ver derrotado este parlamento corrupto.

67. La CSI apoya a sus afiliadas en Venezuela en su lucha por consolidar la democracia y el diálogo, y extiende su apoyo a los trabajadores y trabajadoras y al pueblo de Venezuela, que atraviesan enormes dificultades debido al bloqueo económico impuesto a Venezuela.
68. El Congreso reafirma su apoyo al movimiento sindical legítimo en Somalia, y condena los intentos del Gobierno por socavar la libertad sindical.
69. La CSI ha expresado su profunda preocupación sobre los eventos que están teniendo lugar en Turquía desde el fallido intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016. La CSI y la CES han respaldado la declaración conjunta de nuestras afiliadas turcas y continuarán manteniendo un fondo de ayuda jurídica y recurriendo a otros medios para defender a los sindicalistas. El Congreso afirma su solidaridad y apoyo a las afiliadas turcas en sus luchas.
70. Aunque los trabajadores colombianos, junto al movimiento social, han venido trabajando por conseguir la paz, el Gobierno de Iván Duque no avanza en cuanto a la implementación de los acuerdos firmados por el Estado colombiano y las FARC. Además, no se ha dado continuidad al proceso de solución política con el ELN. La CSI condena los asesinatos de líderes sociales en Colombia y reclama que se dé continuidad al proceso de paz. La CSI participará en las conferencias sobre la paz que tendrán lugar en Europa y en Colombia en 2019.

NORMAS FUNDAMENTALES Y DERECHO DE HUELGA

71. El Congreso reafirma su solidaridad y apoyo hacia todas las organizaciones afiliadas que se movilizan y organizan contra la violación de los derechos humanos y sindicales, ya sea por parte de las empresas o los Gobiernos. El Congreso condena además con la mayor firmeza la ofensiva lanzada desde 2012 por el Grupo de los Empleadores de la OIT contra el reconocimiento universal del derecho de huelga, consagrado en el Convenio 87. El Grupo de los Trabajadores juega un papel clave para salvaguardar y desarrollar las normas y políticas de la OIT.
72. De acuerdo con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el derecho de huelga ha quedado establecido en el derecho internacional desde hace décadas, en instrumentos mundiales y regionales, y también está consagrado en la Constitución de por lo menos 90 países. El derecho de huelga se ha convertido, de hecho, en elemento del derecho internacional consuetudinario. Este aspecto ha sido aducido desde hace tiempo por la Comisión de Expertos, de la OIT, que ha subrayado reiteradas veces que el derecho de huelga es un corolario intrínseco a la libertad sindical y por tanto está cubierto por el Convenio 87 de la OIT. El Comité de Libertad Sindical de la OIT también ha venido apoyando el derecho de huelga como un elemento necesario en muchas situaciones específicas, dado el mayor poder relativo de los empleadores en el lugar de trabajo.
73. Sin el derecho de huelga, los trabajadores y trabajadoras son esclavizados y quedan expuestos a entornos de trabajo que presentan mayor explotación y

peligro, denegándoles la posibilidad de una negociación colectiva efectiva. A nivel nacional e internacional, reafirmamos nuestra determinación a luchar por este derecho humano fundamental.

74. Los Empleadores han lanzado ataques destinados a debilitar los órganos de ILO control en su función de supervisar la aplicación de las normas y a erosionar el marco institucional que la OIT aporta a los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras. El mecanismo de examen, que la CSI acordó implementar en 2015, no debería debilitar aún más el sistema de control, las normas internacionales del trabajo existentes y a la OIT como institución. En este contexto, la mejor defensa es un contraataque. Es por ello que el Congreso pide a la CSI:
- abrir un debate interno sobre el futuro del trabajo y el futuro de la OIT para reforzar la especificidad única de la OIT, definida por su estructura de gobernanza tripartita y su mandato normativo, incluyendo su sistema de control;
 - reforzar el papel del Comité de Derechos Humanos y Sindicales de la CSI y esté mejor involucrado en las actividades pertinentes de la OIT;
 - promover un proceso más democrático e inclusivo para la toma de decisiones y el establecimiento de estrategias respecto al futuro de la OIT, y para intercambiar información y facilitar los debates dentro del Grupo de los Trabajadores del Consejo de Administración de la OIT;
 - preparar una manifestación internacional con ocasión de la conferencia del centenario, favor de un segundo siglo de apoyo al progreso y la justicia social por parte de la OIT;
 - presionar a la OIT para que apunte a nuevas normas pertinentes y de amplio alcance sobre cuestiones respecto a las cuales existen de momento lagunas;
 - reclamar un convenio de la OIT sobre las cadenas de suministro, para regular las actividades y operaciones de las empresas multinacionales imponiendo la obligación de la diligencia debida; y
 - defender la posición de que el respeto de los derechos fundamentales no sólo es una obligación de los Gobiernos nacionales, sino también de las empresas multinacionales.
75. La CSI apoyará a sus afiliadas a nivel nacional e internacional en la defensa del derecho de huelga, como un elemento esencial de la acción sindical y la negociación colectiva.
76. En vísperas del Centenario de la OIT, el Congreso reclama una campaña mundial para exponer a aquellos países que no han ratificado las normas fundamentales de la OIT, y a lograr la ratificación universal y el respeto de los Convenios 87 y 98, en particular. El derecho de huelga debe ser un elemento central de esta campaña. Adicionalmente, la CSI establecerá una estrategia exhaustiva a medio y largo plazo, que incluya identificar los convenios existentes de la OIT sobre cuestiones clave que conviene defender, e identificar áreas donde se requieren nuevos convenios para abordar los

desafíos del cambiante mundo del trabajo. La CSI dará prioridad a la protección y la mejora del actual sistema de control de la OIT, y especialmente el papel de la Comisión de Expertos y del Comité de Libertad Sindical. Cualquier propuesta para modificar el sistema de control de la OIT deberá ser objeto de un debate en profundidad dentro del Grupo de los Trabajadores de la OIT y los órganos de la CSI. Una estrecha cooperación con los miembros trabajadores del Consejo de Administración de la OIT será fundamental a este respecto.

77. El Centenario de la OIT y su iniciativa sobre el Futuro del Trabajo representan un momento clave en la historia para impulsar esta agenda. La CSI intensificará y profundizará el debate estratégico sobre el futuro del trabajo y la OIT, para sacar el máximo partido al impacto sindical respecto al Centenario y el futuro papel de la OIT. Esto incluiría una movilización pública de sindicalistas durante las celebraciones del Centenario.

TRABAJO INFORMAL

78. En muchas regiones del mundo, la forma más común de trabajo es el trabajo informal. En los países industrializados, están surgiendo nuevas formas de relaciones de empleo, que absorben un porcentaje cada vez mayor de la mano de obra. Los derechos laborales y la protección social generalmente dependen de la existencia de una relación de empleo. La CSI defiende los intereses de todos los trabajadores y trabajadoras. La CSI subraya que todos los trabajadores deben poder disfrutar de unos derechos efectivos en el lugar de trabajo, trabajo decente y protección social, independientemente de si tienen o no una relación formal de empleo.
79. En muchas regiones, las afiliadas de la CSI están ya organizando a un número cada vez mayor de trabajadores informales y diseñando estrategias para garantizarles derechos efectivos. Los sindicatos han desarrollado formas innovadoras para extender la protección social a los trabajadores/as informales. La CSI asistirá a sus organizaciones afiliadas en el intercambio de mejores prácticas y para impulsar la afiliación de nuevos miembros.
80. Sindicatos de todo el mundo han demostrado que organizarse colectivamente y emprender actividades conjuntas puede dar fruto.
81. La CSI se compromete a ayudar a los trabajadores/as de la economía informal, en particular, para mejorar colectivamente sus condiciones de vida y de trabajo.

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

82. Los convenios y las recomendaciones de la OIT son el nexo entre los derechos laborales y los derechos humanos. El hecho de que la salud y seguridad en el trabajo no figure como un derecho fundamental del trabajo es una anomalía. El derecho a la salud no se detiene a las puertas de la fábrica.
83. Las lesiones y enfermedades mortales relacionadas con el trabajo alcanzan actualmente 2,78 millones de casos al año, a lo que habría que sumar los casos de violencia en el trabajo, particularmente la violencia contra las mujeres.

84. Alrededor del 20% de los casos de asma están relacionados con el trabajo, y están reapareciendo ciertas enfermedades que se creía superadas, como la enfermedad del pulmón negro, incluso en los países industrializados, mientras que sigue sin aplicarse una prohibición mundial efectiva del amianto.
85. Con nuevas epidemias de enfermedades relacionadas con el trabajo y el incremento de riesgos psicosociales que originan angustia y desesperación con consecuencias como ataques cardíacos, suicidios, derrames cerebrales y adicciones, nuestros lugares de trabajo simplemente carecen de seguridad.
86. El acoso sexual es un factor de riesgo cada vez más prevalente, con graves efectos negativos sobre la salud y seguridad de muchos trabajadores, y especialmente trabajadoras. Para garantizar salud y seguridad en el trabajo para todos los trabajadores y trabajadoras, los sindicatos deben reconocer el acoso sexual como una cuestión de salud y seguridad, y trabajar con vistas a la adopción de medidas preventivas contra el riesgo de acoso sexual.
87. Las organizaciones sindicales nunca aceptarán que el riesgo de lesión, enfermedad o muerte pueda formar parte del trabajo. Son de fundamental importancia el derecho a saber, el derecho a participar y el derecho a negarse a trabajar en entornos peligrosos. Las normas fundamentales de la OIT constituyen una base esencial del futuro del trabajo que queremos, y las normas de salud y seguridad en el trabajo deben incluirse como normas fundamentales del trabajo para todos los trabajadores y trabajadoras, independientemente del tipo de relación de empleo.
88. Crecientes presiones en el trabajo, el empleo de trabajadores/as temporales sin la debida formación y problemas de idioma contribuyen de manera significativa a que las condiciones de trabajo sean inseguras y se produzcan accidentes, por ejemplo, en la industria de la construcción.
89. Unas medidas preventivas adecuadas, incluyendo la protección de los denunciantes, junto con formación y una comunicación clara en el lugar de trabajo, son condiciones importantes para un entorno laboral sano y seguro. Esto se aplica a todos los lugares de trabajo, tanto aquellos con un alto riesgo de accidentes como a los que supongan un alto riesgo de enfermedades, incluyendo enfermedades ocasionadas por riesgos psicosociales en el entorno laboral. Los empleadores son responsables de garantizar la salud y seguridad en el trabajo y tienen que colaborar con los sindicatos a tal efecto, lo que implica entre otras cosas conceder el tiempo, la formación y la información necesaria a los representantes sindicales sobre salud y seguridad.
90. Todos los trabajadores y trabajadoras deberían tener derecho a trabajar en un entorno laboral limpio que cuente con acceso a agua potable y cuartos de baño limpios para hombres y mujeres. Los empleadores deben facilitar un área limpia, con lavaderos, donde los trabajadores/as puedan preparar su comida, comer y beber durante las pausas en el trabajo.

91. El Congreso resuelve intensificar la acción sindical mundial respecto a todas las preocupaciones en materia de salud y seguridad en el trabajo, para asegurarse de que las normas de la OIT al respecto estén incluidas entre las normas fundamentales del trabajo. Haremos campaña por una prohibición mundial del amianto y, teniendo en cuenta que el 10 por ciento de todas las muertes por cáncer están relacionadas con el trabajo, aspiraremos a lograr “cáncer cero en el trabajo”. La adopción universal del reglamento REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) es fundamental para abordar la producción y el empleo de productos químicos, así como su potencial impacto sobre la salud humana y el medio ambiente.

COMBATIR EL POPULISMO

92. Se observa un creciente desencanto respecto a la idea de la globalización y un menor respeto de las normas internacionales, incluso dentro de las economías desarrolladas. Intereses individuales, la falta de solidaridad, la codicia, la xenofobia y el racismo se conjugan para crear un ambiente que propicia el auge de partidos políticos de extrema derecha y del populismo, así como un repliegue hacia el nacionalismo.
93. La OIT no es inmune a estas tendencias. Los sindicatos necesitan promover el objetivo de justicia social de esta importante institución internacional, incluyendo a través de sus mecanismos tripartitos, su papel de supervisión y su rol crucial respecto a otras instituciones internacionales. Los sindicatos deberán además trabajar para mejorar su funcionamiento en interés de los trabajadores y trabajadoras.
94. El Congreso pide una reforma del sistema multilateral para garantizar los derechos humanos, la prosperidad compartida a través del desarrollo sostenible y poner fin a la condicionalidad ortodoxa del FMI, que ha impulsado la austeridad y ataques contra la negociación colectiva, los salarios mínimos y la protección social. El Congreso pide asimismo que el Banco Mundial deje de promover la desregulación del mercado de trabajo, o la privatización de la educación y otros servicios públicos vitales como salud, electricidad, saneamiento y agua.
95. No debemos conformarnos con reformar las instituciones mundiales existentes, sino que habrá que considerar la creación de otras nuevas para asegurar que los trabajadores y trabajadoras tengamos algo que decir sobre nuestras vidas, especialmente habida cuenta de los cambios en la estructura del capital. “**Nada** sobre nosotros sin **nosotros**” ha de ser un principio rector. El Congreso afirma que la OIT debe estar en el centro de este sistema internacional, para garantizar la coherencia de las políticas internacionales a favor de la justicia social y que sus normas, su estructura de gobernanza, la independencia de sus programas y financiación, y su mandato constitucional sean respetados por todas las instituciones internacionales. Se ha de dar prioridad a la OIT dentro del sistema de gobernanza global a fin de aprovechar al máximo el potencial de esta agencia normativa tripartita de la ONU para abordar las preocupaciones reales de los trabajadores/as y sus sindicatos.

HACER OIR NUESTRA VOZ

96. En un gesto sin precedentes, la Asamblea General de la ONU concedió el estatus de observador a la Cámara de Comercio Internacional (ICC) en diciembre de 2016. Esta decisión supone que por primera vez una organización comercial sea admitida como observadora en la Asamblea General de la ONU. Resulta totalmente inaceptable que las empresas tengan voz directa en la Asamblea de la ONU, y que no la tenga el movimiento sindical internacional, por medio de la CSI y las FSI.
97. La CSI tiene estatus consultivo general en el ECOSOC de la ONU. Como un paso hacia la reforma de la ONU, la CSI y las FSI exigen que se les conceda estatus de observador formal en la Asamblea General de la ONU. Se ha iniciado una campaña de presión en este sentido, que continuará hasta que se logre una auténtica representación de los interlocutores sociales. El Congreso exhorta asimismo a que todos aquellos que trabajan para la ONU disfruten del pleno respeto de sus derechos a la libertad sindical y la negociación colectiva.

ACABAR CON LA ESCLAVITUD MODERNA

98. El Congreso aplaude el enfoque global respecto a la esclavitud moderna, aunque constata que hasta 89 millones de personas quedaron atrapadas en este tipo de prácticas en los últimos 5 años. Los sindicatos pueden desempeñar un papel central para conseguir la total eliminación de todas las formas de esclavitud. El Congreso de Berlín de la CSI la determinó como una prioridad y ahora se reconoce que la CSI encabeza la lucha para eliminar la esclavitud moderna.
99. El Protocolo de la OIT sobre Trabajo Forzoso, de 2014, establece claramente la obligación de los Gobiernos de prevenir y eliminar el trabajo forzoso, y la CSI redoblará esfuerzos para lograr la adopción y aplicación universal de este importante instrumento.
100. Eliminar la esclavitud moderna en las cadenas mundiales de suministro, apoyando las acciones emprendidas por las FSI y las afiliadas en sectores específicos, y llevar a cabo una campaña por la abolición del sistema de la *kafala* en todos los países del Golfo, constituyen objetivos importantes en la lucha contra el trabajo forzoso. Deberá prestarse especial atención también a los trabajadores/as migrantes que quedan atrapados en condiciones de esclavitud.
101. La campaña internacional para asegurar que Qatar –país anfitrión del Mundial de Fútbol 2022– ponga fin al sistema de la *kafala* y armonice su legislación con las normas de la OIT, ha tenido un profundo impacto en Qatar, y ha sensibilizado a la opinión pública sobre el uso generalizado de la esclavitud moderna en el Golfo. La CSI felicita a las afiliadas, así como a la ICM, la ITF y sus aliados en la comunidad, que han hecho campaña para exponer las condiciones de explotación de dos millones de trabajadores migrantes que prestan servicios y construyen el enorme programa de infraestructura para la Copa del Mundo de la FIFA en 2022.

102. Qatar ha asumido nuevos compromisos ante la CSI, la ICM y la ITF, y existe un programa de cooperación técnica entre la OIT y el Gobierno.
103. Las actividades de la CSI deben seguir centrándose tanto en cimentar estos logros como en intensificar los esfuerzos para eliminar la esclavitud en todas partes, incluyendo el uso continuado del sistema de la *kafala* por parte de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, en particular. En otros países de la región existen también sistemas similares.
104. Con la UNI y la ICM, la CSI ha contribuido al desarrollo del centro independiente para el deporte y los derechos humanos, que garantizará un enfoque integral en todo el mundo del deporte para prevenir y remediar las violaciones de los derechos de los trabajadores y otros derechos humanos en la industria del deporte. Las propuestas de mega-eventos deportivos se evaluarán de conformidad con criterios relativos a los derechos humanos y laborales, con medidas de cumplimiento que incluyan la diligencia debida y el acceso a la presentación de recursos para garantizar el trabajo decente en la construcción, los servicios y las cadenas de suministro para la comercialización de productos asociados a los principales eventos deportivos y con el sector en general.
105. La CSI, junto con las Federaciones Sindicales Internacionales, apoya los esfuerzos encaminados a aprovechar la atención del público en relación con mega-eventos deportivos para poner de relieve la necesidad de que las compañías respeten las normas internacionales del trabajo. Esto incluye los sistemas de control de la OIT.

TRABAJO INFANTIL

106. La eliminación del trabajo infantil es una prioridad para el movimiento sindical. A pesar de los progresos efectuados en las últimas décadas, se estima que 152 millones de niñas y niños siguen involucrados en trabajo infantil, incluyendo 73 millones en sus peores formas. La CSI se compromete a alcanzar la meta 8.7 de los ODS de la ONU, relativa a la eliminación plena y sostenible del trabajo infantil para 2025.
107. Ningún Gobierno puede renunciar a su responsabilidad en cuanto a la legislación, el cumplimiento y la protección. Y ninguna empresa ha de poder recurrir al trabajo infantil directamente ni a través de su cadena de suministro. Tendría que prohibirse el recurso al trabajo infantil y al trabajo forzoso, mediante regulaciones vinculantes y leyes nacionales, regionales e internacionales. Poner fin al trabajo infantil requiere además estrategias destinadas a asegurar que todos los niños y niñas tengan acceso a una educación de calidad, y brindar apoyo a las familias para garantizar que los niños vayan a la escuela en lugar de tener que trabajar y requiere condiciones de trabajo dignas para los padres, incluyendo la posibilidad de organizarse y de negociar colectivamente.

2. Regulación del poder económico

108. El Congreso declara que el actual modelo económico global es injusto y resulta insostenible. Se trata de un modelo de desigualdad por naturaleza, donde las corporaciones dominan a los Gobiernos y a las personas, lo que constituye una amenaza a la democracia misma. Los trabajadores y sus familias encabezan la creciente desconfianza en la globalización, y muchos están perdiendo la fe en los principios mismos de la democracia. La economía mundial sigue estando en peligro, en ausencia de una regulación financiera efectiva, que resulta tan necesaria como antes de estallar la crisis financiera.
109. El Congreso determina que debe intensificarse la lucha contra todas las formas de codicia corporativa y por la regulación del poder económico en interés público. No aceptaremos la creciente informalización y precarización del trabajo y cuestionaremos un despliegue de tecnologías en la producción mundial que propicie el aumento de la desigualdad, incluyendo la desigualdad de género. Es hora de cambiar las reglas. El movimiento sindical internacional no dejará que nadie se quede atrás.
110. El Congreso pide el reconocimiento y respeto universales del sistema de negociación colectiva a todos los niveles, de la libertad sindical y los derechos fundamentales en el trabajo por parte de todas las organizaciones internacionales, especialmente las Instituciones Financieras Internacionales. El Congreso solicita una campaña global reclamando que cumplan su compromiso de respetar todas las normas de la OIT actualizadas, incluyendo la libertad sindical y la negociación colectiva, en todas sus actividades. La CSI debería además establecer un grupo de expertos sindicales sobre las IFI, encargado de desarrollar la mejor estrategia posible para alcanzar este objetivo y apoyar a las afiliadas nacionales. El Congreso insta a la CSI a colaborar con las FSI, particularmente aquellas con miembros en el sector público, para oponerse a los programas de desigualdad, al empeoramiento de las condiciones de trabajo y al debilitamiento de los sistemas de protección social promovidos por organizaciones como el FMI y el Banco Mundial. La CSI deberá difundir sus logros a la hora de contrarrestar las políticas de esas organizaciones. La ONU y otros organismos internacionales como el Banco Mundial y el FMI deben apoyar la tributación progresiva y fortalecer servicios públicos como los sistemas de sanidad, electricidad, saneamiento, agua y protección social. Teniendo en cuenta el historial negativo de las asociaciones público-privadas, dichos organismos han de abstenerse de cualquier tipo de promoción en el marco de la cooperación al desarrollo.

PUNTO DE INFLEXIÓN

111. El mundo está llegando a un punto de inflexión. El 60 por ciento del comercio mundial está ahora en manos de empresas multinacionales que se apoyan en una estructura comercial basada en la explotación, la discriminación y la violación de los derechos humanos en las cadenas de suministro, y con violaciones generalizadas de la legislación laboral nacional por parte de sus

proveedores. Las organizaciones sindicales de todo el mundo deben unirse en la lucha por el trabajo decente.

112. La corrupción, la evasión fiscal y la contaminación de la tierra, el aire y el agua están profundamente arraigadas en la economía mundial, al tiempo que las corporaciones evitan la responsabilidad de la diligencia debida, así como de los mecanismos de reclamación y reparación requeridos por los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
113. Las corporaciones más grandes emplean directamente apenas al 6% de los trabajadores y trabajadoras de los que dependen para obtener sus beneficios. El 94 por ciento de los trabajadores/as en la cadena de suministro, que forman parte de una mano de obra oculta que contribuye al crecimiento mundial en general, debe obtener una parte justa de los dividendos de la producción y la riqueza creada. Las estructuras corporativas están cambiando, como resultado de la creciente importancia de las grandes compañías tecnológicas. Entre tanto, las multinacionales desvían las ganancias obtenidas, que podrían utilizarse para aumentar los salarios de sus trabajadores/as y para el pago de impuestos, transfiriéndolas a paraísos fiscales, de forma encubierta y en beneficio de los ricos.
114. Los beneficios de las empresas suelen provenir de la reducción de costos y una mayor flexibilidad, que derivan en salarios demasiado bajos para que las personas puedan vivir dignamente, y empleos que ocasionen muertes, lesiones y enfermedades. En sectores con mano de obra intensiva, una elevada movilidad y dependientes de los costos, como la construcción, suele abundar el trabajo informal y precario. Las cadenas mundiales de suministro se apoyan también cada vez más en el trabajo informal, precario e incluso el trabajo infantil y la esclavitud. La fragmentación de las responsabilidades inherentes en la compleja composición de las cadenas mundiales de suministro, con múltiples niveles, ha creado una “brecha de gobernanza” que habría que corregir. Debería exigirse a las compañías situadas en lo más alto de la cadena que aseguren el respeto de los derechos fundamentales y condiciones decentes a todos los niveles. Esto incluye transparencia y control, con mecanismos negociados y disposiciones legislativas para garantizar el cumplimiento y garantizar reparación.
115. Los Gobiernos son intimidados por las exigencias de las corporaciones, los bancos y los mercados financieros. Quedan atrapados por medidas de austeridad –impuestas por la ortodoxia fallida del FMI, el Banco Mundial y otras instituciones– que constituyen un ataque a los derechos de los trabajadores, los salarios, la protección social y los servicios públicos.

UN NUEVO MODELO DE COMERCIO

116. Apoyamos un modelo de comercio basado en la justicia social. Rechazamos los acuerdos de comercio e inversión y las guerras comerciales provocadas por las élites corporativas en interés propio. Los acuerdos comerciales deben posibilitar una mejora de los derechos de los trabajadores y la protección de los servicios públicos. Nos oponemos a una visión del libre comercio que no incluya un

comercio justo; que desregule el empleo y las normas alimentarias, de protección del consumidor y medioambientales; que ofrezca los servicios públicos como la sanidad a multinacionales rapaces; y que otorgue a los inversores extranjeros el privilegio de poder demandar a Gobiernos elegidos democráticamente por actuar en interés de los trabajadores/as. Reclamamos que los acuerdos de comercio e inversión y la política de competencia recompensen el cumplimiento con las normas de la OIT, prohíban el dumping social e incorporen condiciones de transición justa. La OIT deberá ser la autoridad para la interpretación de las disposiciones vinculantes en los acuerdos de comercio, y la CSI apoyará la introducción de cláusulas relativas a la “**nación más favorecida**” en dichos acuerdos, para imponer estándares más elevados.

117. Los derechos del trabajo, incluyendo el derecho a formar sindicatos, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la huelga son fundamentales para el desarrollo social y económico. La CSI apoyará la inclusión de todas las normas actualizadas de la OIT en los acuerdos comerciales con el fin de evitar una carrera hacia el fondo respecto a la regulación. Esas normas de la OIT deberán ser de obligado cumplimiento en los acuerdos, a través de mecanismos generales de solución de controversias y quejas, acompañados de sanciones económicas en caso de violación. Los acuerdos de comercio e inversión son y deben ser herramientas para el desarrollo económico, social, ambiental y democrático, incluyendo la libertad sindical y el diálogo social, y redundar en beneficio de los trabajadores/as y sus comunidades. La CSI defenderá y promoverá evaluaciones de impacto específicas sobre las cuestiones de género, así como cláusulas sobre la promoción de la igualdad de género. El Congreso se compromete a promover un comercio mundial justo con el objetivo de que las obligaciones de diligencia debida en materia de derechos humanos formen parte de los acuerdos comerciales.
118. Gobiernos de países en vías de desarrollo se lanzan cada vez más a concluir acuerdos de libre comercio con los países desarrollados. Estos acuerdos desequilibrados erosionan los derechos económicos, sociales y medioambientales. Exigimos que todos los acuerdos de libre comercio integren la movilidad de las personas, la transferencia de conocimientos y tecnología y la ayuda al desarrollo, para ir más allá de los aspectos puramente comerciales.
119. Las empresas están ahora promoviendo una nueva generación de acuerdos comerciales que establecen unas reglas de la globalización todavía más favorables a sus intereses, extendiéndose más allá de los aranceles y llegando a restringir la capacidad de los Gobiernos para proveer servicios públicos y regular sobre aspectos como salud y seguridad, privacidad de los datos, propiedad intelectual, medicamentos, mecanismos de estabilidad financiera y el medio ambiente.
120. Los acuerdos comerciales deben respetar el poder regulador y la prestación de servicios públicos por parte de los Gobiernos. La garantía del acceso universal a servicios públicos de calidad debe tener prioridad sobre el avance de la liberalización, la privatización y los derechos de los inversores.

121. Estos acuerdos imponen una versión corporativa de las políticas de competencia y establecen mecanismos para la resolución de litigios entre inversores y Estados que permiten demandar a los Estados por sumas muy elevadas por cumplir mandatos democráticos. Las enormes extralimitaciones de estos acuerdos comerciales bilaterales y plurilaterales socavan el sistema de comercio multilateral y la reacción pública podría sembrar el terreno para guerras comerciales.
122. Se invierten considerables fondos públicos para el desarrollo de medicamentos que luego se venden a precios muy superiores al costo real. La CSI reclama un acceso universal y asequible a los medicamentos esenciales, que deberían ser gratuitos para aquellos que no puedan pagarlos.
123. La política comercial, los derechos de propiedad intelectual y la política de competencia deben reformarse para permitir y apoyar transiciones justas y trabajo decente. Los acuerdos comerciales internacionales deben incluir cláusulas sociales y medioambientales vinculantes basadas en los convenios de la OIT pertinentes.
124. Insistimos además en la necesidad de reformar la OMC para incluir compromisos vinculantes respecto a los derechos fundamentales en el trabajo y otros derechos humanos y abordar de manera efectiva la sobrecapacidad global en industrias clave. El punto de vista adoptado por la Comisión de Expertos de la OIT será vinculante para la solución de diferencias de la OMC.
125. Sólo con estos profundos cambios en el modelo comercial, podrán los trabajadores/as ver el comercio como una vía hacia la prosperidad compartida en lugar de un intercambio de suma cero que ha empujado a muchos a las filas de la extrema derecha.

SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

126. La influencia empresarial está además imponiendo a Gobiernos e instituciones la ideología de la privatización y la liberalización, así como el fallido modelo de subcontratación de los servicios públicos. Reafirmamos que la inversión y la apropiación públicas, y el control democrático son medios apropiados para alcanzar objetivos sociales, y reclamamos la promoción de servicios públicos de calidad y la aplicación de políticas progresistas en la contratación pública. La privatización y la liberalización, incluyendo nefastas asociaciones público-privadas, han causado un enorme daño a unos servicios de los que dependen los trabajadores y trabajadoras, profundizando las desigualdades al enriquecer a empresas privadas y ocasionando una mayor inseguridad y salarios más bajos para los trabajadores/as, especialmente en los países menos ricos. El Congreso declara su firme oposición a la demolición de los sistemas sociales existentes y la imposición de condicionalidad injusta dentro de los mismos, y luchará activamente por mejorar los sistemas existentes. Lucharemos igualmente para extender la protección social a todos y todas.

127. El Congreso apoya el papel central que unos servicios públicos de calidad universales desempeñan en el logro de los derechos humanos, ya que combaten la desigualdad, promueven el desarrollo económico y crean estabilidad social y paz. El Congreso se opone a la privatización y al recurso a soluciones basadas en el mercado para la aportación universal de servicios públicos vitales. El Congreso se opone a la tendencia de recortar la administración pública y externalizar la formulación de políticas a consultorías, grupos de interés especiales y proveedores privados.
128. La CSI hará campaña, junto con las FSI y sus afiliadas, a favor de servicios públicos de calidad universales, incluyendo entre otros educación, agua, energía, sanidad, justicia y servicios sociales vitales de cuidados; y contra cualquier forma de privatización.

UN SISTEMA FISCAL JUSTO

129. El Congreso rechaza la premisa de la competencia fiscal entre países. Se requiere cooperación fiscal internacional para corregir la ruptura en las reglas impositivas globales. Un elemento central del problema es la falsa premisa de que las compañías dentro de un mismo grupo puedan comerciar entre ellas como si estuviesen en el mercado abierto. Solo funcionará un enfoque unificado de la imposición a las empresas multinacionales. La CSI apoyará a las Federaciones Sindicales Internacionales y las afiliadas en la lucha por la justicia fiscal. El fracaso de los Gobiernos para regular y fiscalizar a conglomerados digitales globales permite una acumulación de poder monopólico en muchos sectores de la economía mundial. Existe una falta de voluntad política de legislar las prácticas laborales, fiscales y sociales de las nuevas plataformas digitales globales. El dominio del mercado por parte de empresas cuya magnitud las hace intocables está destruyendo empleos locales y pequeñas empresas y socavando la libertad sindical y la negociación colectiva. El acopio de grandes cantidades de datos personales de sus empleados y clientes da pie a un comportamiento predatorio que no conoce límites.
130. Estas empresas representan ejemplos prominentes del comportamiento de la mayoría de las corporaciones mundiales, que recurren a esquemas transnacionales para evadir sus responsabilidades en lo relativo a los derechos de los trabajadores, los impuestos y el medio ambiente.

CRISIS SALARIAL MUNDIAL

131. Para millones de personas, se requiere urgentemente un aumento del salario mínimo a fin de asegurar un salario digno, que cubra el costo de las necesidades básicas para una familia. Esto representaría una mera fracción de los beneficios que obtienen las grandes corporaciones, a las que cada trabajador de sus cadenas de suministro puede hacerles ganar hasta 17.000 USD.
132. El Congreso encomienda además a la CSI y a sus organizaciones y estructuras regionales, trabajando en colaboración con las Federaciones Sindicales Internacionales y sus afiliadas, a llevar a cabo campañas reclamando salarios

dignos y aumentos salariales en todo el mundo. En los países de África, Asia y América Latina, deben establecerse pisos salariales basados en el costo de una cesta de productos esenciales, a fin de garantizar un salario mínimo con el que los trabajadores, las trabajadoras y sus familias puedan vivir con dignidad. La CSI apoyará la labor de la CES encaminada a garantizar un aumento salarial general en Europa, incluyendo su campaña “Pay Rise”.



133. Pese a que los salarios mínimos, bien negociados o implementados por ley, han de aportar el mínimo necesario para garantizar una vida digna, los trabajadores/as deberán además poder negociar colectivamente y con total libertad a través de sus sindicatos, para conseguir salarios que reflejen el auténtico valor de su trabajo y para obtener condiciones de trabajo decente.

COMBATIR LA CODICIA CORPORATIVA

134. El poder corporativo está fuera de control. Es necesario exponer el modelo de codicia corporativa y corrupción representado por empresas que, como Samsung, muestran un virulento antisindicalismo, deniegan la libertad sindical y pagan salarios de miseria en las cadenas de suministro. Sus trabajadores y trabajadoras están pagando con sus vidas y sus medios de subsistencia un modelo de negocios que sitúa los beneficios por encima de su seguridad y sus posibilidades de llevar una vida digna.
135. Ese modelo de negocio debe ser reemplazado por sistemas de relaciones laborales constructivas, en consonancia con los Convenios 87 y 98 de la OIT, el trabajo decente, la protección social y un clima político estable sin temor de represalias. El diálogo social y los convenios colectivos proporcionan un método inigualable para promover la justicia social lograr un progreso social y económico inclusivo. La negociación colectiva a todos los niveles, el diálogo social y el tripartismo son herramientas centrales para luchar contra las desigualdades y han de ser parte esencial de estos sistemas. La extensión de la cobertura de la negociación colectiva es un objetivo sindical clave, para hacer frente al problema de las crecientes desigualdades. La CSI se compromete a apoyar a las afiliadas nacionales en sus actividades al respecto y a defender esta política ante las instituciones internacionales.
136. El Congreso confirma que debemos organizar para cambiar las reglas. El Congreso instruye a las organizaciones y estructuras regionales de la CSI, trabajando en colaboración con las Federaciones Sindicales Internacionales y sus afiliadas, a luchar por:
 - Un convenio de la OIT sobre las cadenas de suministro que incluya marcos globales que incluyan las normas fundamentales del trabajo, para la negociación transnacional y la negociación colectiva;

- La implementación efectiva de la Declaración EMN de la OIT;
 - Incorporar las normas de seguridad y salud en el trabajo de la OIT a las normas fundamentales del trabajo;
 - La obligación de diligencia debida en todas las cadenas de suministro, incluyendo las nuevas formas de cadenas de servicios internacionales, que incorpore mecanismos de reclamación y reparación a todos los niveles;
 - Un tratado vinculante de la ONU sobre empresas y derechos humanos, apoyado por sistemas efectivos de reparación;
 - Reforzamiento de los Puntos Nacionales de Contacto para tramitar las quejas en el marco de las Directrices de la OCDE para las Empresas Multinacionales;
 - Mecanismos de Conformidad para garantizar el cumplimiento de los acuerdos internacionales contraídos entre los sindicatos mundiales y las empresas multinacionales;
 - Cooperación fiscal internacional, leyes fiscales de imposición progresiva y medidas para su cumplimiento, incluyendo un tratado impositivo global, un registro global de activos, un tipo efectivo de como mínimo el 25 por ciento para el impuesto de sociedades, y en última instancia un organismo fiscal global;
 - Incorporar las normas de la OIT, incluyendo las normas fundamentales del trabajo, en los procesos de contratación pública para grandes proyectos de infraestructura y en las condiciones generales de las IFI;
 - Acuerdos comerciales justos que no socaven el sistema de comercio multilateral, limiten la capacidad de los Gobiernos de reglamentar, fomenten la privatización, minen la democracia, afiancen los intereses de las empresas, promuevan una agenda de desreglamentación ni contengan ningún tipo de mecanismos de resolución de litigios entre inversores y Estados.
137. La CSI trabajará junto con las FSI para reforzar y replicar el Acuerdo de Bangladesh sobre Seguridad de Edificios y Prevención de Incendios y otras formas de responsabilidad social impulsada por los trabajadores en las cadenas de suministro, para garantizar derechos y condiciones de trabajo decente.
138. En caso de un incumplimiento claro y sustancial de la ley, la CSI brindará su apoyo siempre que sea necesario para que sus organizaciones afiliadas tomen las medidas legales necesarias en las jurisdicciones locales, regionales o mundiales y las ayudará a reforzar su capacidad jurídica.
139. La CSI, la TUAC y las FSI se han unido para la campaña a favor de la diligencia debida en las cadenas de suministro, con procedimientos de reclamación efectivos para asegurar un medio de reparación, de conformidad con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Constituye una base para responsabilizar a las empresas, y ya se han logrado avances con la *loi de vigilance* en Francia, el Pacto tripartito en los Países Bajos, el Acuerdo de Bangladesh, la guía de la OCDE sobre la debida

diligencia y las negociaciones para un Tratado vinculante de las Naciones Unidas para las Empresas y los Derechos Humanos. Este impulso ha de ser ahora apoyado por todas las partes involucradas y traducirse en progresos tangibles respecto a la diligencia debida y acceso a recursos.

140. La codicia corporativa se manifiesta mediante el empleo de cada vez más trabajadores/as con contratos flexibles y temporales, en lugar de ofrecerles contratos permanentes de empleo. Se manifiesta igualmente recurriendo al trabajo en nube y/o plataformas, así como a la imposición del régimen de autónomos a los trabajadores/as. La CSI aspirará a limitar este tipo de empleo, asegurándose de que los empleadores no se aprovechen sustituyendo contratos permanentes de empleo por trabajo precario, y a organizar y garantizar derechos, incluyendo el derecho de negociación colectiva, a todos los trabajadores/as independientemente de la naturaleza de su relación de empleo o contractual. La CSI buscará promover políticas e instrumentos legales a nivel nacional e internacional que dismantelen las prácticas fraudulentas de empleo de las cadenas de suministro, a fin de proteger los derechos de los trabajadores/as cualquiera sea su relación de empleo. Esto ha de constituir una prioridad.
141. El Pacto Mundial, iniciado por Suecia y promovido por la OCDE y la OIT, proporciona una base importante para avanzar en el diálogo social y la negociación colectiva con empresas multinacionales, y debe contar con el apoyo del movimiento sindical internacional.
142. Para salvar la creciente brecha entre trabajadores y capital, es necesario un cambio en las relaciones de poder. Lucharemos por un nuevo contrato social innovador, para el logro de los ODS. Incluye:
 - La garantía de salarios mínimos vitales y negociación colectiva;
 - Pleno empleo con empleos decentes y seguros y el desarrollo tripartito de políticas de desarrollo industrial favorables a los trabajadores/as;
 - Protección social universal y servicios públicos vitales para todos;
 - Leyes que garanticen los derechos de los trabajadores/as de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas de la OIT;
 - Aprendizaje permanente con especial énfasis en una educación pública de calidad y formación para los trabajadores;
 - Igualdad de género y no discriminación;
 - Derecho al trabajo e igualdad de trato para migrantes y refugiados; y
 - Poner fin a la evasión fiscal y la corrupción corporativa.
143. Si queremos dar prioridad a las personas y al planeta, frente a los beneficios de las empresas, debemos recuperar el poder sobre el capital de los trabajadores. Una opción que ha demostrado su eficacia es asumir la gestión de los ahorros para la jubilación. Alentamos a las afiliadas a apoyar o a implicarse en el Comité sobre el Capital de los Trabajadores (CWC), una iniciativa de la CSI, las FSI y la TUAC, promoviendo el intercambio de información y acciones conjuntas en el ámbito del capital de los trabajadores.

3. Transformaciones mundiales - Transiciones justas

144. Aun cuando la riqueza mundial ha aumentado en más del 30 por ciento en los últimos diez años y el PIB mundial se ha triplicado en los últimos 20, la pobreza sigue imperando y continúa habiendo casi mil millones de personas que viven con menos de 1,90 USD al día. La pobreza de los trabajadores y trabajadoras está incrementándose en todo el mundo, y uno de cada seis trabajadores en Europa puede calificarse de “trabajador pobre”. Está aumentando la desigualdad, y más del 70 por ciento de la población mundial carece de protección social, o tiene una inadecuada. Los conflictos y la desesperación económica han dado lugar a niveles históricos de migración y flujos de refugiados, al tiempo que la aceleración de la devastación climática y los desafíos relativos a la salud pública, incluyendo las pandemias y epidemias, persisten como amenazas omnipresentes.
145. Estas realidades, junto con la rápida expansión de la digitalización, la automatización y los cambios en las tecnologías de producción y energía, están generando enormes riesgos en el mundo del trabajo, incluso para los empleos seguros y no peligrosos. Las transformaciones mundiales nos ofrecen oportunidades para implementar transiciones justas. El progreso tecnológico en el mundo del trabajo será bien acogido siempre que el movimiento sindical esté involucrado para dar forma y regular el proceso y se introduzca de manera responsable. El movimiento sindical internacional quiere construir un mundo mejor y la tecnología puede ser un instrumento para lograrlo.
146. Sin una intervención regulatoria e inversión en la creación de empleo, los riesgos derivados de estos cambios globales incluyen un creciente desempleo, mayor intensificación del trabajo y un desplazamiento de personas aún más importante.
147. El Congreso deplora la masiva y creciente desigualdad global, y reclama una transición justa hacia una economía digitalizada y baja en carbono, con pleno empleo y un futuro del trabajo que sea sostenible, equitativo y sin discriminación en base al género, identidad sexual, raza, ideología, religión, o cualquier otro motivo.
148. El movimiento sindical internacional no aceptará una mayor precarización e informalización del trabajo so pretexto de la innovación, ni permitirá que la tecnología fomente la polarización del empleo y una desigualdad irreversible. La CSI exige que todas las transformaciones en el mundo del trabajo tengan lugar en el marco de transiciones justas. Los procesos de cambio pueden y deben beneficiar a la mayoría, en lugar de incrementar las riquezas y el poder de una minoría.
149. La CSI abogará por una negociación colectiva centralizada y coordinada, donde las derogaciones a nivel de empresa únicamente estén autorizadas cuando mejoren las condiciones de trabajo, en lugar de una fragmentación de la negociación colectiva. Los trabajadores y trabajadoras deben tener este derecho a todos los niveles y respecto a todos los temas vinculados a sus intereses.

150. El diálogo social presupone la existencia e implementación efectiva de los derechos de libertad sindical y negociación colectiva. El diálogo social es más amplio que la negociación colectiva y podría incluir al Gobierno a distintos niveles.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

151. Los inminentes cambios tecnológicos posiblemente perturbarán el mundo del trabajo con la rápida expansión de la digitalización, que exigirá nuevas competencias a los trabajadores/as. La automatización y cambios en la organización de los procesos productivos, vienen a sumarse a la inseguridad para los trabajadores/as respecto a la forma de los lugares de trabajo del futuro, la disminución de las oportunidades de empleo, la resiliencia de los sistemas de seguridad social y el aumento de la desigualdad con la supresión de salarios.
152. La digitalización también ofrece nuevas oportunidades para la creación de empleo, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, el desarrollo de competencias y los ingresos. La digitalización es un nuevo desafío económico y social que afecta a estructuras económicas, cadenas de valor y relaciones de poder. El Congreso expresa su preocupación respecto al creciente recurso a las redes sociales por parte de grupos extremista de cualquier ideología, para difundir temor, estigmatización y repliegues identitarios de todo tipo
153. El Congreso resuelve que esta transición hacia nuevas tecnologías ha de estar configurada por políticas más firmes, la participación de los interlocutores sociales a través de la negociación colectiva, y la intervención del Estado, y no exclusivamente por consideraciones tecnológicas y la búsqueda de beneficios. La digitalización y automatización han de beneficiarnos a todos, incluso con la aportación de mayor calidad de bienes y servicios y el desarrollo personal en el trabajo. En una era de creciente digitalización, el Congreso reafirma el principio de que el trabajo no es una mercancía.
154. La reducción de la jornada laboral negociada colectivamente sirve de palanca para garantizar que el progreso tecnológico esté al servicio del progreso humano. Es una herramienta esencial para ayudar a las personas con una sobrecarga de trabajo y que no disponen de tiempo libre para su vida privada y familiar, así como para las personas (especialmente mujeres) atrapadas en condiciones de subempleo, precariedad y trabajo a tiempo parcial. La reducción colectiva de la jornada laboral es un medio para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, y para lograr una mejor gestión del tiempo.
155. La reducción a gran escala en la protección del empleo, junto con la “uberización” predatoria de la economía, alimenta la ansiedad y la desigualdad. En ausencia de regulación, las empresas de plataforma están incrementando el trabajo informal y otras formas de trabajo no cubiertas por la legislación laboral regular, el diálogo social y la protección social, a expensas de empleos decentes, un problema que afecta particularmente a las mujeres.

156. Ha de prestarse particular atención a los trabajadores/as en empresas de plataforma y en la “nube”, que hoy en día carecen de un estatus de empleo propiamente dicho, no pueden reclamar derechos de propiedad intelectual ni gozan de derechos fundamentales y otros beneficios de los que deberían disfrutar todos los trabajadores. Forzados a entrar en la categoría de contratistas independientes, en detrimento de sus ingresos, perspectivas de pensión, conciliación de trabajo y vida privada, estos trabajadores necesitan el apoyo de los sindicatos para organizarse y emprender acciones colectivas. La CSI promoverá acciones sindicales internacionales para asistir a los sindicatos a organizarlos y representarlos, y reclamar el reconocimiento legal de sus derechos.
157. Aquellos que escojan o que se vean obligados a trabajar como autónomos deben tener derecho a afiliarse a sindicatos y ser considerados como trabajadores/as. Deben tener derecho a negociar colectivamente para establecer sus tarifas y condiciones asociadas.
158. Gigantes de internet como Alibaba, Amazon, Apple, Facebook, Google y Weibo dominan cada vez más no solamente los datos, sino también la vida económica y social, y en muchos casos distorsionan la política nacional e internacional. Si se abandona el control humano dejándolo a los algoritmos y a la inteligencia artificial, el mundo deberá hacer frente a la desintegración social. El Congreso resuelve responsabilizar a los Gobiernos para proteger la privacidad de sus ciudadanos y hacer responsables a las empresas multinacionales en cuanto a la protección de datos en relación con sus empleados, clientes y la sociedad en general. El ser humano debe tener y retener el control democrático en la era de los datos para poder utilizar la tecnología con vistas al progreso social y económico, y los trabajadores y trabajadoras deben tener derecho a rechazar cualquier vigilancia intrusiva por parte del empleador en sus lugares de trabajo y en su vida privada.
159. Los avances tecnológicos tienen el potencial de estimular los mayores incrementos de productividad de la historia, pero hace tiempo que la brecha entre el crecimiento de la productividad y el crecimiento salarial ha venido profundizándose. Los trabajadores/as deben ser capaces de decidir, participar, ser consultados y estar involucrados cuando se desarrollen nuevas formas de producción. Todos los trabajadores deben estar equipados con la capacitación adecuada de manera que no se deje a nadie atrás al introducir cambios tecnológicos. El Congreso compromete a la CSI a desarrollar y apoyar el intercambio de información y experiencias sobre la organización de trabajadores en el contexto de los avances tecnológicos.
160. Para las economías en desarrollo y emergentes, los rápidos avances en la automatización y el uso de robots, así como la “relocalización” de la producción de vuelta a las economías desarrolladas, limitan el potencial de crecimiento del empleo que conlleva un sector manufacturero en expansión. Esta situación incrementará la dificultad para generar el aumento de puestos de trabajo requeridos para el gran número de jóvenes que ingresan al mercado laboral cada año.

161. La CSI apoyará también la organización de las Federaciones Sindicales Internacionales y sus afiliadas frente al trato deshumanizante que reciben los trabajadores y trabajadoras en los gigantes de la tecnología, que parecen no distinguir entre el trato dado a los seres humanos y a los robots.
162. El futuro del trabajo ha de ser un futuro con empleo seguro y derechos. Los cambios no pueden estar dictados simplemente por el mercado y las posibilidades tecnológicas. Los Gobiernos tienen que desarrollar políticas industriales y de empleo adecuadas, mediante el diálogo social y garantizando transiciones justas, de manera que sea posible mantener debates y negociaciones reales en relación con cambios en la organización del trabajo. Todas las partes interesadas han de estar involucradas en procesos de planificación estratégica, con políticas activas del mercado de trabajo para sacar el máximo beneficio del cambio tecnológico, crear nuevos empleos decentes y asegurar la recalificación y oportunidades de aprendizaje permanente para todos los trabajadores, especialmente aquellos en peligro de quedar marginados. Deben ofrecerse oportunidades educativas y de aprendizaje permanente para los trabajadores sin importar su nivel de capacitación. Los sistemas de seguridad social y las pensiones deben ocupar también un lugar central. El diálogo social y la negociación colectiva han sido claves en el pasado para una flexibilidad centrada en los trabajadores y una innovación inclusiva, y deberá seguir siendo el caso.

CAMBIO CLIMÁTICO

163. El Acuerdo de París sobre el Clima supone un paso importante hacia la sostenibilidad, pero los Gobiernos deberán incrementar su ambición y asegurar inversiones en empleo y transiciones justas. Se están perdiendo vidas y medios de subsistencia debido al cambio climático, y un mundo con un aumento de la temperatura de más de 1,5°C sería inseguro y representaría un riesgo para la naturaleza, las sociedades y las economías.
164. Los trabajadores y trabajadoras directamente afectados deberán ser tratados de manera justa. Todo el peso del cambio no puede recaer sobre aquellos que tienen menos capacidad para asumirlo –ya sea en industrias que inevitablemente declinarán, o en los países en desarrollo que requieren más energía para el desarrollo económico y social–. Unas responsabilidades comunes pero diferenciadas han de asegurar que aquellos países que se han enriquecido emitiendo gases de efecto invernadero asuman responsabilidades adicionales. El movimiento sindical luchó y obtuvo el compromiso de los Gobiernos en relación con una Transición Justa con el Acuerdo de París, y la consiguiente aprobación de las Directrices de política de la OIT en relación con medidas para una transición justa. No obstante, es necesario hacer más para garantizar el cumplimiento del Acuerdo.
165. La lucha contra el cambio climático requiere invertir en tecnologías sostenibles y bajas en carbono. Esto implica un despliegue global de industrias innovadoras y eficientes, energías renovables y redes energéticas inteligentes. El movimiento sindical internacional reconoce que este desarrollo representa

una gran oportunidad para la creación de nuevos y mejores empleos, así como para el crecimiento y el desarrollo regionales.

166. Los costos de las políticas sobre cambio climático deben distribuirse de manera equitativa entre los países. Las políticas sobre cambio climático no han de desembocar en desigualdades de ingresos aún mayores.
167. Instamos a los países a llevar a cabo evaluaciones de impacto sobre la distribución de costos y beneficios del cambio climático y medidas políticas de transición energética entre los países.
168. La remunicipalización es una estrategia viable para una transición energética socialmente justa, que sitúe a las personas por encima de los beneficios.

LAS PERSONAS AL MANDO

169. En ausencia de transiciones justas, los riesgos del cambio climático y la cuarta revolución industrial pueden superar los enormes beneficios y el potencial que ofrece la tecnología. Un acceso en pie de igualdad a la educación de calidad, incluyendo el aprendizaje permanente, así como igualdad en el acceso y el uso de la tecnología, resultan esenciales para lograr transiciones justas. Esto es especialmente significativo para la gente joven que ingresa actualmente al mercado de trabajo.
170. Las garantías de la transición justa deben estar en el centro de todos los cambios mundiales, incluyendo el cambio climático, la innovación tecnológica o los flujos de migrantes y refugiados. La transición justa requiere:
 - Planes para la creación de empleos verdes;
 - Pensiones seguras para los trabajadores/as mayores desplazados de sus puestos;
 - Garantías de cualificación y de empleo/reasignación para todos los trabajadores/as, incluyendo los que ingresan en el mercado laboral, para apoyar la movilidad laboral;
 - Garantías de trabajo decente: derechos laborales, salario mínimo vital y negociación colectiva;
 - Derecho al trabajo e igualdad de trato para migrantes y refugiados;
 - Una transición de la economía informal a la formal y combatir la creciente informalización del trabajo;
 - Protección social universal, incluyendo la protección de los ingresos para todos;
 - Inversión en empleos de calidad y comunidades sostenibles;
 - Implementación del diálogo social y mecanismos tripartitos eficaces (C.144 de la OIT); y
 - Derechos reforzados de información y consulta para los trabajadores/as.
171. Los trabajadores/as tienen derecho a saber y a negociar con los Gobiernos y los empleadores para garantizar que se implementen medidas de Transición Justa en relación con todas las transformaciones económicas, ambientales,

demográficas y relacionadas con el trabajo. El diálogo social y la negociación colectiva deben ser respetados y reforzados por todos los Gobiernos, los empleadores y otras instituciones como la base para garantizar el futuro del trabajo que las personas desean. La iniciativa de Pacto Mundial puede contribuir a generar impulso para lograr estos objetivos. El Centro de Transición Justa de la CSI puede ayudar a garantizar que sindicatos, Gobiernos, empresas y las comunidades implicadas puedan trabajar juntas y que la lucha contra el cambio climático represente empleos verdes, seguros y decentes. En todos estos foros e iniciativas, los convenios y recomendaciones de la OIT representarán la normativa mínima aceptable. La inversión en políticas activas del mercado de trabajo y educación, incluyendo el aprendizaje a lo largo de toda la vida, son elementos esenciales para las transiciones justas. No obstante, los actuales niveles de inversión son lamentablemente insuficientes, ya que los países de la OCDE destinan apenas un 1,32 por ciento de su PIB a medidas activas del mercado de trabajo y el 4,4 por ciento a la educación. Estas inversiones deben incrementarse. Aunque se requiere seguridad social y protección para los trabajadores vulnerables en sectores clave, resulta insuficiente. Es fundamental que se realicen mayores inversiones en infraestructura y empleos limpios.

172. Transiciones justas, con una sociedad basada en la paz, la democracia y los derechos, así como un mercado de trabajo justo y funcional, únicamente pueden lograrse si se apoyan invirtiendo en una educación de calidad para todos. Esto implica:
 - Una enseñanza de calidad, a través de la contratación de candidatos a la docencia de alto nivel, que cuenten con una formación inicial docente de calidad y apoyo a lo largo de toda su carrera mediante desarrollo profesional continuo.
 - Herramientas de calidad para la docencia y el aprendizaje –incluyendo programas de estudio apropiados y material y recursos de enseñanza y aprendizaje inclusivos.
 - Entornos de calidad para la docencia y el aprendizaje, que sean propicios, confortables, seguros y protegidos, contando con las facilidades apropiadas para alentar el aprendizaje de los estudiantes y permitir a los docentes enseñar eficazmente.
173. La Comisión de la OIT sobre el futuro del trabajo presentará su informe a debate durante la Conferencia de la OIT en 2019. Reuniendo los conocimientos y la experiencia sindical respecto al futuro del trabajo, la CSI ha elaborado su análisis y programa² sobre las políticas y acciones necesarias para aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías y garantizar que el futuro se cimiente en los principios perdurables establecidos en la Declaración de Filadelfia³.

² https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/the_future_of_work_es.pdf

³ http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:62:0::NO::P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907

174. Los principios del futuro del trabajo, incluyendo nuevas tecnologías, deberán basarse en las normas de la OIT, el diálogo social y una transición justa, para:
- Emplear la tecnología para empoderar, no para debilitar a los trabajadores/as, y mejorar las condiciones de trabajo;
 - Promover la inclusión económica y social;
 - Establecer reglas para llegar a una rendición de cuentas vinculante por parte de las empresas, independientemente de dónde o cómo se emplee la mano de obra;
 - Facilitar la portabilidad de beneficios para todos los trabajadores;
 - Asegurar que las empresas cumplan con una licencia social para operar, con reglas de juego uniformes y salvaguardando la relación de empleo para garantizar la protección del empleo;
 - Aprendizaje permanente para aumentar oportunidades de acceder a buenos empleos;
 - Asegurar reglas de juego uniformes para todas las empresas que garantice los derechos de los trabajadores y otros derechos humanos.
175. El Congreso reafirma que la dignidad del trabajo es esencial para nuestros valores fundamentales y reconoce que valorar el conjunto del trabajo requiere de los sindicatos luchen por el pleno empleo y el trabajo decente.

4. Igualdad

176. La desigualdad económica global se sitúa en un máximo histórico, y sigue en aumento. Está provocada, y a su vez provoca, discriminación social, política y económica en base al género, la raza u otras características. La discriminación y la denegación de derechos son la antítesis de la solidaridad, fundamento del sindicalismo. Las desigualdades económicas se derivan de una globalización confinada a sus dimensiones comerciales y financieras, que agravan todo tipo de discriminación, particularmente aquella basada en la raza y el género.
177. El Congreso reafirma el compromiso del movimiento sindical mundial hacia la no discriminación y nuestra oposición a la violencia de género en todos los lugares del mundo. Igualmente, nos oponemos al sexismo, el racismo, la homofobia, la transfobia, la discriminación por motivos de edad, la xenofobia y la represión, ahí donde existan. El movimiento sindical internacional debe luchar activamente por la inclusión social y la justicia racial y de género en sus filas, en las relaciones laborales y en las políticas públicas.

DERECHOS DE LA MUJER

178. El mundo sindical debe proyectar un mensaje feminista, igualitario y solidario. Las mujeres sindicalistas tienen un mensaje central: ¡Cuenta con nosotras! Las cuestiones relativas a la mujer son cuestiones sindicales esenciales. Los derechos de los trabajadores son derechos humanos. Los derechos de la mujer son derechos sindicales.

179. El Congreso se compromete con un movimiento sindical inclusivo y feminista, que organice a los no organizados, ya sean migrantes, trabajadores/as en la economía informal, en empresas de plataformas, en empleos precarios, temporales o a través de agencias, o en cualquier otra forma de trabajo donde los trabajadores/as estén viéndose privados de derechos y protecciones.
180. En todos los indicadores, los resultados en relación con las mujeres revelan lo siguiente:
- La educación para las mujeres revierte en oportunidades de empleo mejor remunerado y mayor independencia económica, estándares de salud más altos para las familias y mayores ingresos familiares.
 - El empleo de mujeres es uno de los multiplicadores más rápidos de productividad y crecimiento económico.
 - Las mujeres contribuyen con cerca de 10 billones de USD en salarios al PIB mundial, además de un monto equivalente en trabajo no remunerado, y todavía más si se tiene en cuenta la economía informal.
 - Con la creciente movilidad, las trabajadoras migrantes están contribuyendo a las economías tanto de sus países de acogida como de sus países de origen –a través de las remesas–, sus comunidades y sus familias.
181. Sin embargo, en el mundo del trabajo, el progreso de las mujeres se ha estancado. Los enormes avances conquistados respecto a los derechos de la mujer en el último siglo están siendo atacados y en algunos países incluso se han revertido. La tasa de participación de la mujer en la mano de obra global es del 48,5 por ciento y tiende a la baja por los persistentes efectos de la austeridad. Los cuidados no remunerados representan alrededor del 9 por ciento del PIB mundial, y tres cuartas partes de dicho trabajo es realizado por mujeres. El valor de ese trabajo debe ser reconocido teniendo derecho a prestaciones sociales en las mismas condiciones que el trabajo remunerado. Igualmente importante es el hecho de que la brecha de género entre hombres y mujeres en las pensiones puede llegar a ser hasta del 30-40 por ciento.
182. Pese a un mejor acceso a la educación y su elevado rendimiento, las mujeres siguen estando infra-representadas en puestos directivos y continúan siendo una excepción en algunos países y sectores.
183. Solo el 55 por ciento de las mujeres en edad de trabajar tienen un empleo formal en comparación con 77 por ciento de los hombres. La brecha salarial de género sigue siendo del 23 por ciento, es decir que apenas se ha logrado una mejora del 3 por ciento en los últimos 20 años.
184. El Congreso exhorta a la adopción de políticas macroeconómicas, sociales y de empleo destinadas a salvar la brecha salarial de género y combatir la discriminación y exclusión del mercado de trabajo de mujeres y grupos desfavorecidos, entre otros medios mediante la protección de la maternidad, permisos parentales remunerados, servicios públicos y de calidad para el cuidado de niños, personas mayores y enfermos, y disposiciones laborales

pensadas para las familias, tanto para mujeres como para hombres. Los niveles impositivos y la seguridad social deberán diseñarse para alentar la participación en el mercado laboral y el empleo tanto de hombres como de mujeres. Redunda en interés de todos garantizar que los impuestos y la seguridad social no creen incentivos para dejar de trabajar.

185. Para incrementar el nivel y la calidad de participación de las mujeres en el mercado de trabajo, resulta esencial que los Gobiernos desarrollen y apliquen políticas destinadas a mejorar la independencia económica de la mujer, incluyendo:
- La plena implementación de los Convenios 100 y 111 de la OIT;
 - Protección social universal y la plena implementación del Convenio 102 y la Recomendación 202 de la OIT;
 - Medidas de transición del empleo informal al empleo formal;
 - Salvar la brecha de género respecto a salarios y pensiones;
 - Poner fin a la discriminación en todas sus formas;
 - Acabar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo;
 - Garantizar mayor influencia de los trabajadores/as respecto a sus horarios y lugares de trabajo;
 - Invertir en la economía de cuidados y desarrollar políticas que permitan un reparto equitativo de cuidados y trabajo entre hombres y mujeres;
 - Guarderías más atractivas, es decir de mejor calidad, más asequibles y cercanas;
 - Instar a los empleadores a que los puestos de trabajo sean más estimulantes y ofrezcan mejores oportunidades profesionales;
 - Fomentar la representación de mujeres en todos los puestos y profesiones, incluyendo ocupaciones técnicas;
 - Contribuir a hacer las empresas más atractivas para potenciales mujeres empleadas y que resulten más favorables a las familias por medio de regulaciones e incentivos.
186. El Congreso reafirma el compromiso de la CSI para lograr que nuestro movimiento sindical sea más representativo y para aumentar la representación de mujeres a todos los niveles.
187. Se han logrado progresos en la organización y representación de las mujeres trabajadoras. Dieciséis afiliadas de la CSI han informado del éxito sustancial en el aumento de mujeres afiliadas desde 2014, entre un 2,5 por ciento y un 23 por ciento. La tasa media de afiliación de las mujeres dentro de las afiliadas de la CSI es del 42,4 por ciento.
188. Aun cuando la representación de las mujeres en cargos de liderazgo debe aún reforzarse, ha aumentado hasta el 14,4 por ciento de mujeres en uno de cada dos de los puestos más altos en la actualidad, en relación con el 12 por ciento en 2012. La representación media de mujeres en los órganos de decisión más altos de las organizaciones afiliadas de la CSI es ahora del 28 por ciento.

189. El Congreso felicita a las organizaciones afiliadas que se han comprometido con este aspecto para mejorar la igualdad dentro de sus propias filas, y hace un llamamiento a los sindicatos de todo el mundo para que redoblen esfuerzos a fin de garantizar que las trabajadoras, incluyendo las jóvenes, estén organizadas y plenamente representadas en las estructuras sindicales, en línea con las disposiciones relevantes en los Estatutos de la CSI.
190. El Congreso insta a todas las afiliadas a comprometerse a lograr al menos un 40 por ciento de representación de mujeres en los cargos directivos.
191. La CSI apoyará además a sus afiliadas para mejorar la situación de la mujer en los lugares de trabajo, reclamando inversión en servicios públicos de calidad como cuidados infantiles y de ancianos, horarios de trabajo tanto para mujeres como para hombres que resulten favorables para las familias y permisos de maternidad y paternidad remunerados.
192. El Congreso está alarmado por el creciente fenómeno global del feminicidio, una violación extrema de los derechos humanos que amenaza a la mitad de la población mundial.
193. La CSI expondrá la violencia de género en todas sus formas y ha promovido un apoyo crucial a la adopción de un Convenio de la OIT complementado por una Recomendación sobre “**Violencia** y acoso contra mujeres y hombres en el mundo del **trabajo**”, con un fuerte enfoque en la dimensión de género de la violencia.
194. El Congreso reclama la adopción de un Convenio contundente de la OIT sobre la violencia de género y el acoso, en particular el acoso sexual, en la Conferencia de la OIT en 2019. El Congreso afirma que la prioridad de las organizaciones sindicales debe ser ahora organizar y fortalecer la acción sindical para erradicar la violencia contra mujeres y hombres del mundo del trabajo.

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL HOGAR

195. Habida cuenta que una de cada 25 trabajadoras es una trabajadora del hogar, con frecuencia en empleos vulnerables y en situación de explotación, es evidente la necesidad de ayudarlas a organizarse para mejorar su vida.
196. La labor internacional para organizar a las trabajadoras del hogar ha creado una solidaridad mundial que incluye a migrantes e indígenas y personas de color, y la campaña está dando resultados en el ámbito de los derechos y la protección mediante la ratificación del Convenio 189 de la OIT por parte de 25 países y la adopción de reformas a la legislación laboral en otros 49 países. En la actualidad, hay medio millón de trabajadores y trabajadoras del hogar que se han sindicalizado. Las nuevas tecnologías pueden ayudar a los trabajadores/as del hogar a entrar en la economía formal, pero al mismo tiempo, las nuevas formas de *crowd work* y las plataformas digitales podrían empujarlos nuevamente a la informalidad. El Congreso afirma la necesidad de hacer campaña en todo el mundo reclamando igualdad de derechos para los trabajadores/as del hogar, la

ratificación y aplicación del Convenio 189 de la OIT, incluso para el trabajo doméstico organizado a través de plataformas digitales.

197. El Congreso se compromete a continuar apoyando la organización de los trabajadores y trabajadoras del hogar y los marcos jurídicos que los protegen y apoyan.

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES/AS INFORMALES

198. Teniendo en cuenta la creciente informalización del trabajo y la elevada proporción de trabajadores/as atrapados en la economía informal en todo el mundo, el Congreso afirma que la membresía sindical sigue siendo prioritaria para las afiliadas nacionales. La organización de trabajadores/as en la economía informal debería servir como transición de la economía informal a la economía formal. El Congreso reclama un enfoque integrado e inclusivo para la transición de la economía informal a la formal, a través de la plena implementación de la Recomendación 204 de la OIT, teniendo como objetivo aumentar salarios, mejorar las condiciones de trabajo e incluirlos en el movimiento sindical en tanto que miembros cotizantes. Los interlocutores sociales son asociados clave para un enfoque exitoso.
199. El Congreso afirma la necesidad de que todas las organizaciones afiliadas asuman el desafío de organizar a las trabajadoras y los trabajadores vulnerables y marginados, garantizar los derechos fundamentales y el cumplimiento de los salarios mínimos y la protección social universal.

COMBATIR EL RACISMO Y LA XENOFOBIA

200. El movimiento sindical se enorgullece de contar con un historial de luchas contra la discriminación racial, tanto en el lugar de trabajo como en la comunidad. Con el auge del racismo y la xenofobia, que representan una amenaza contra los cimientos de unas sociedades decentes y de la solidaridad, el compromiso sindical con la igualdad y la no discriminación es tan importante como nunca antes en la historia.
201. El racismo y la xenofobia no tienen cabida ni en el trabajo ni en la sociedad en general, y el Congreso reafirma que los sindicatos seguirán movilizándose en todo el mundo para promover y defender los derechos de todas las personas independientemente de su nacionalidad, origen, identidad o etnicidad; para exponer y condenar a aquellos que fomenten la intolerancia racial; y trabajarán con otros oponiéndose a la xenofobia y al racismo a todos los niveles. Todas las personas tienen derecho al trabajo y a la igualdad de trato.

MIGRANTES Y REFUGIADOS

202. El flujo masivo de migrantes está relacionado con causas estructurales incluyendo el cambio climático, tendencias demográficas, urbanización, falta de empleos decentes, miseria, persecución, guerra y malestar social y político. Mucha gente abandona su hogar no tanto buscando mayor prosperidad, sino simplemente para sobrevivir. El derecho a solicitar asilo es un derecho humano

fundamental que debe salvaguardarse. Otro desafío importante es el reconocimiento efectivo del derecho de los migrantes a no abandonar sus hogares. Las políticas de desarrollo deben por tanto ser efectivas y sostenibles y reducir la distribución desigual de riqueza y crecimiento económico.

203. El Congreso constata que la migración responde asimismo a la demanda de las empresas para obtener mano de obra barata. Convendría promover la incorporación de las normas fundamentales del trabajo de la OIT en la fase de contratación pública y en las condiciones generales del Banco Mundial y otras IFI para la financiación de proyectos, a fin de proteger a todos los trabajadores involucrados.
204. Para los trabajadores migrantes y refugiados la xenofobia, que se ve amplificada por los extremos del espectro político, supone un riesgo a la vida y el sustento de 150 millones de personas que solo buscan un refugio seguro y el derecho al trabajo. A pesar de la contribución que realizan a sus nuevos países, muchos se enfrentan a la explotación, la discriminación y la violencia y carecen incluso de las protecciones más fundamentales. Esta situación afecta particularmente a las mujeres, que representan el 44 por ciento de los trabajadores migrantes.
205. La CSI reforzará el apoyo a las organizaciones afiliadas que organizan a los trabajadores y trabajadoras migrantes y hará campaña contra los abusos y la opresión hacia los migrantes. Alzaremos aún más nuestras voces por el derecho al trabajo con el mismo trato para los refugiados y migrantes, y lucharemos contra el racismo en todos los lugares de trabajo.
206. El Congreso apoya el sitio web de asesoría en materia de contratación de la CSI y, en cooperación con otras iniciativas de las organizaciones afiliadas, ampliará su presencia para garantizar que los trabajadores y trabajadoras migrantes conozcan sus derechos y las normas legislativas del país anfitrión, que tengan la posibilidad de calificar sus agencias de trabajo y de comunicarse con los sindicatos y entre ellos mismos en busca de apoyo. Igualmente, aplaudimos el compromiso de los sindicatos que hacen campaña por los derechos de los migrantes y nos comprometemos a apoyar las iniciativas de organización de las organizaciones afiliadas tanto de países de origen como de países de acogida.
207. Todos los trabajadores/as migrantes, incluyendo los trabajadores y trabajadoras temporales, deben poder disfrutar del derecho a la libertad sindical y de negociación colectiva. Los Convenios 97 y 143 de la OIT sobre trabajadores migrantes y la Convención de la ONU sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares son instrumentos clave para la organización y protección de los trabajadores/as migrantes y la CSI hará campaña activamente para su ratificación. Las recomendaciones 86 y 151 de la OIT, el Marco Multilateral sobre Migración Laboral y los Principios generales y directrices operativas para la contratación equitativa, ofrecen orientación adicional a Gobiernos, empresas y sindicatos.

208. En 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió desarrollar un Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular, con el objetivo de mejorar la gobernanza de la migración, abordar los desafíos y fortalecer la contribución de los/las migrantes al desarrollo sostenible.
209. El Congreso reconoce que en este debate debe prestarse mayor atención a la migración ‘circular’ y realizarse mayores esfuerzos para garantizar su derecho a la igualdad de trato, la libertad sindical y la negociación colectiva. En sectores con mano de obra intensiva y móvil como la construcción, o dependientes de la influencia de las estaciones como la agricultura, los empleadores recurren a una mano de obra precarizada que en ocasiones puede describirse como ‘nómadas modernos’. Van de un proyecto a otro, contando con poca o ninguna protección, y corren un enorme riesgo de explotación, abusos o de terminar en el sector informal. La migración circular es una forma de migración que hasta la fecha no ha sido abordada en las discusiones en relación con el Pacto Mundial sobre migración, pese a que este grupo de personas representa un importante porcentaje de los trabajadores/as migrantes precarizados.
210. Los convenios de la OIT sobre trabajadores migrantes y el diálogo social deben ser elementos centrales para la aplicación del Pacto Mundial, alentando la adopción de marcos de gobernanza para una migración laboral equitativa a todos los niveles, a través del diálogo social con quienes están en primera línea del mercado laboral: ministerios gubernamentales, empleadores y sindicatos. El pueblo de Turquía es un ejemplo al respecto, acogiendo a 3,5 millones de refugiados sirios, en un marco de cooperación entre el Gobierno, empleadores y sindicatos, así como con organizaciones internacionales.
211. Al mismo tiempo, los Gobiernos han estado negociando un Pacto sobre los Refugiados, que reconozca los importantes desafíos que plantea la protección internacional, tales como el desplazamiento causado por los desastres naturales, los conflictos armados y el cambio climático. Aún no se ha abordado la cuestión del reasentamiento y el reparto de responsabilidades. El 85 por ciento de los refugiados del mundo son acogidos por países en desarrollo.
212. Los sindicatos pueden ayudar directamente acogiendo a los migrantes en sus filas y alentándolos a convertirse en sindicalistas activos. La lucha por los derechos de los trabajadores/as migrantes no está restringida a los círculos gubernamentales, sino que se extiende también al lugar de trabajo, los sindicatos y la sociedad en general.
213. El Congreso compromete a la CSI a coordinar un diálogo global y regional sobre migración. Reafirmamos el compromiso de la CSI con el derecho a solicitar asilo y que los migrantes y los refugiados sean bienvenidos, exigiendo un refugio seguro, el derecho al trabajo y la igualdad de trato para ellos. Recordamos la obligación de todos los países a acoger y ayudar a aquellas personas que huyen de guerras, represión, extrema pobreza y los efectos del cambio climático.

214. El Congreso hace hincapié en que todos los trabajadores y las trabajadoras tienen derechos, independientemente de su estatus migratorio, y reclama acciones para prevenir la explotación de los trabajadores/as indocumentados. Tienen derecho a un salario justo, entornos laborales seguros, y acceso a mecanismos de quejas efectivos para reclamar sus derechos. Se necesitan vías para salir de irregularidad e integrarse en las sociedades de acogida.

IGUALDAD PARA TODOS

215. Incluso en aquellos países que han introducido leyes y políticas antidiscriminatorias que protejan a las personas LGBTQI, de manera regular se producen casos de exclusión social, acoso e intimidación, despidos improcedentes y otros incidentes fóbicos hacia estos colectivos.
216. Aunque no se dispone de cifras exactas, numerosos países tienen una legislación insuficiente o inadecuada que reconozca la situación de las personas transgénero o intersexuales.
217. Los sindicatos tienen un papel que desempeñar para proteger a todas las personas en el lugar de trabajo frente a cualquier tipo de discriminación, trabajando para la adopción de medidas preventivas y promoviendo la igualdad de oportunidades.
218. Del mismo modo, la violencia y la discriminación contra trabajadores pertenecientes a minorías raciales y étnicas, LGBTQI, indígenas, personas con discapacidades, migrantes o refugiados, resulta intolerable.
219. El Congreso felicita a las organizaciones sindicales que participan en campañas de igualdad en el matrimonio, incluyendo en Australia, Colombia, Costa Rica, Irlanda, Gran Bretaña, Japón y Estados Unidos. Estas luchas han brindado esperanza a las personas, además de ampliar las garantías de derechos humanos y generar solidaridad a escala mundial. Pero son demasiado pocos los países que han prohibido la discriminación en base a la orientación sexual en el trabajo o en áreas como bienes y servicios, educación o acceso a la vivienda. La CSI afirma su compromiso hacia la comunidad LGBTQI y la necesidad de que todas las afiliadas asuman el reto de buscar activamente la manera de mejorar la protección legislativa para las personas y los trabajadores/as LGBTQI, y hacer lo necesario para asegurar su cumplimiento.
220. La CSI resuelve continuar alentando a las afiliadas a incluir la lucha contra la discriminación de LGBTQI en sus políticas y actividades. Resuelve además apoyar y facilitar el establecimiento de un grupo de trabajo internacional conjunto con las FSI, integrado por sindicalistas activos en la defensa de los derechos del colectivo LGBTQI, con el objetivo de generar ideas de acciones y actividades.
221. Para las personas con discapacidad, la lucha por la protección social y las garantías de ingresos se ha vuelto aún más difícil ante la austeridad que aplica recortes a las pensiones, los servicios públicos y la protección social. Las

personas con discapacidad se enfrentan a una doble discriminación, tienen menos probabilidades de obtener un empleo y una vez empleadas suelen ganar menos. La brecha salarial de género para las mujeres con discapacidad es hasta un 22 por ciento mayor que para las mujeres sin discapacidad. La discriminación por discapacidad en el empleo es a menudo una realidad silenciosa, y las organizaciones sindicales deben organizarse para asegurar mercados laborales inclusivos y lugares de trabajo que garanticen los derechos, la dignidad y la igualdad de trato.

222. Para los pueblos indígenas sigue prevaleciendo la discriminación, incluso cuando existen leyes claras y se han firmado tratados. En cada región, los sindicatos tienen una fuerte tradición de apoyo a los derechos indígenas. El CLC de Canadá apoyó la Encuesta pública nacional sobre mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas, lo que puede proporcionar un modelo al que se remitan otros defensores en sus propios países.
223. Los pueblos indígenas están organizados, pero sus estructuras deben ser reconocidas y respetadas. Los sindicatos también deben examinar sus propias prácticas incluso cuando se exija la acción gubernamental. En demasiadas comunidades la población vive en la pobreza extrema sin acceso a la protección social siendo más vulnerable a la amenaza de acaparamiento de tierras por parte de grandes corporaciones.
224. El Congreso se compromete a apoyar a los trabajadores/as indígenas, incluyendo una campaña a favor de la ratificación y aplicación del Convenio 169 de la OIT, como parte del compromiso sindical a lograr el reconocimiento legal de los derechos de los pueblos indígenas a la tierra, los recursos y a su identidad cultural.

TRABAJADORES/AS DE TODAS LAS EDADES

225. Un número significativo de los trabajadores y trabajadoras pobres son jóvenes. Tienen tres veces más probabilidades que los trabajadores de mayor edad a estar desempleados. También tienen más posibilidades de estar subempleados, realizar trabajos precarios, trabajar en la economía informal, o sufrir explotación en el lugar de trabajo mediante arreglos de pago en efectivo, trabajo en prácticas no remunerado, remuneración insuficiente, intimidación y acoso. Estas condiciones derivan en un futuro económico incierto para los trabajadores y las trabajadoras jóvenes.
226. El Congreso se compromete a invertir en la organización y el desarrollo de liderazgo entre los trabajadores/as jóvenes, para contar con una nueva generación de líderes sindicales y ampliar las vías para una acción colectiva de todos los trabajadores. Las políticas y campañas a nivel internacional, regional y nacional deberían pasar un '**test generacional**' para garantizar su relevancia para los trabajadores/as jóvenes y que promuevan:
 - Igual salario por trabajo de igual valor, garantizando los mismos salarios mínimos para los jóvenes;

- Combatir los falsos aprendizajes en empresas, mal remunerados o no remunerados;
 - Garantías empleo para los y las jóvenes que ni trabajan, ni estudian, ni siguen ningún tipo de formación (NiNis);
 - Extender la protección social a los jóvenes que abandonaron sus estudios y no tienen empleo; y
 - Una norma de la OIT en relación con los contratos temporales, incluyendo los contratos de duración determinada, y la discriminación basada en el estatus de empleo.
227. El Congreso instruye a la CSI y sus organizaciones y estructuras regionales, trabajando con los asociados de la Agrupación Global Unions y las afiliadas, a emprender acciones para asegurar condiciones de trabajo y empleo decentes para la juventud, con vistas a prevenir su aislamiento social e incorporarla al movimiento sindical.
228. Una sociedad justa y equitativa protege a sus trabajadores y trabajadoras incluso después de jubilarse. Los pensionistas deben poder contar con unos ingresos estables, en los que no repercuta la influencia negativa de la crisis económica y otros eventos.
229. Las mujeres, en particular, necesitan acceder a planes de pensiones decentes, especialmente aquellas que en el pasado no tuvieran acceso a un empleo formal y estable o que han tenido que trabajar a tiempo parcial. La CSI defiende sistemas de pensiones universales, que garanticen seguridad de ingresos y solidaridad a todos y todas.
230. Todas las personas, incluyendo grupos vulnerables, como los mayores, desempleados de larga duración, trabajadores con discapacidades, trabajadores precarios y familias monoparentales, necesitan tener acceso a protección social y apoyo adecuados, a una vivienda asequible y a cuidados. La CSI reclama pisos de protección social universal que brinden protección a todas las personas, independientemente de su relación de empleo.

EL CONGRESO AFIRMA EL PAPEL CENTRAL QUE TIENEN LOS SINDICATOS PARA GARANTIZAR DERECHOS, DEMOCRACIA, LIBERTAD Y UN MUNDO DONDE EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS Y TODAS SEA UNA REALIDAD. A TRAVÉS DE LA ACCIÓN RESPECTO A LOS CUATRO PILARES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, LA CSI RESUELVE ABORDAR LOS DESAFÍOS A LOS QUE SE ENFRENTAN LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS, Y CAMBIAR LAS REGLAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL. OBTENDREMOS UN NUEVO CONTRATO SOCIAL QUE DÉ PRIORIDAD A LAS PERSONAS. NO DEJAREMOS A NADIE ATRÁS.